

No	FECHA FIJACION ESTADO	JDO	NI	CONDENADO	DELITO	FECHA	DECISION
1	10	7	37524	GERARDO ALONSO CORREDOR CASTILLO	PORTE DE ESTUPEFACIENTES	03-04-24	REDENCION DE PENA - CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL
2	10	7	37524	YEFERSON ANDRES RODRIGUEZ ALMEIDA	PORTE DE ESTUPEFACIENTES	03-04-24	REDENCION DE PENA - CONCEDE PRISION DOMICILIARIA
3	10	7	8544	PABLO COBOS ARDILA	ACTO SEXUAL ABUSIVO	03-04-24	REDENCION DE PENA
4	10	7	9801	PEDRO JOSE NIÑO ORTIZ	CONCIERTO PARA DELINQUIR	01-04-24	REDENCION
5	10	5	39081	LUCIA KARINE URREA USMA	EXTORSIÓN Y OTROS	07-03-24	DENIEGA REDENCIÓN DE PENA
6	10	5	39473	OSCAR MAURICIO CÁCERES SORACA	HURTO CALIFICADO	11-03-24	RECONOCE REDENCIÓN DE PENA
7	10	5	39708	LISARDO GARCÍA ROBAYO	HOMICIDIO AGRAVADO	08-03-24	RECONOCE REDENCIÓN DE PENA
8	10	5	37784	ENMANUEL RESTREPO NIEBLES	LESIONES PERSONALES DOLOSAS	13-03-24	NIEGA EXTINCIÓN DE LA PENA
9	10	5	33869	JAIR SEBASTIÁN COBOS SANTANA	HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y OTROS	04-04-24	NIEGA PRISIÓN DOMICILIARIA
10	10	5	2985	JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA	03-04-24	CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL
11	10	5	33662	ROBINSON EDUARDO HERNÁNDEZ GARZA	HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y OTROS	04-04-24	NIEGA PRISIÓN DOMICILIARIA
12	10	5	26149	JHON WILLIAM GUTIERREZ JAIMES	HURTO CALIFICADO	04-04-24	RECONOCE REDENCIÓN DE PENA - NIEGA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA
13	10	2	10798	FELIX ENRIQUE APARICIO CANTILLO	TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES	03-04-24	CORIGE NOMBRE EN AUTO
14	10	2	10289	OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA	VIOLENCIA INTRAFAMILIARA	02-04-24	CONCEDE LC
15	10	2	10289	OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA	VIOLENCIA INTRAFAMILIARA	02-04-24	NIEGA RECURSO REPOSICION
16	10	2	10598	EDGAR BEDOYA CORTES	CONCIERO PARA DELINQUIR	04-04-24	REDENCION PENA

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, dos (2) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	LIBERTAD CONDICIONAL- CONCEDE						
RADICADO	NI 10289 (CUI 68001 6000 159 2022 08701 00)			EXPEDIENTE	FISICO		
					ELECTRONICO	x	
SENTENCIADO (A)	OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA			CEDULA	91 110 648		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPMS ERE DE BUCARAMANGA						
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	NO APLICA						
BIEN JURIDICO	FAMILIA	LEY906/2004		LEY 600/2000		LEY 1826/2017	X
PETICON PARTE	x			DE OFICIO			

ASUNTO

Resolver la petición de libertad condicional en relación con el sentenciado OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 91 110 648.

ANTECEDENTES

El Juzgado Primero Penal Municipales con Funciones Mixtas de Girón, emitió sentencia de fecha 30 de enero de 2023, en la que condenó a OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA, a la pena de 24 MESES DE PRISIÓN e INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS por el término de la pena de prisión, como autor responsable del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Se le negaron la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

Su detención data del 25 de diciembre de 2022, y lleva a la fecha en privación de la libertad 15 MESES 7 DÍAS DE PRISIÓN. Actualmente se halla privado de la libertad en el CPMS ERE de Bucaramanga por este asunto.

PETICIÓN

En esta fase de la ejecución de la pena, se recibe oficio escrito del penado AMAYA FERREIRA, mediante el cual aclara el arraigo familiar y social, para la concesión del sustituto de libertad condicional, consistente en:



- i. Declaración extra juicio rendida por las Sra. Mayra Alejandra Ferreira Olivar, compañera sentimental del interno quien desiste de la demanda de violencia.
- ii. Declaración de la Sra. Lucila Ferreira Viuda de Amaya, madre del interno.
- iii. Declaración de Flor Ángela Ferreira Tapias, tía del interno quien manifiesta su deseo de recibirlo en la dirección ubicada en la calle 107 No 33-51 Barrio Alto Viento de Floridablanca.

Que serán valorados con los que reposan en la foliatura, a saber:

- Concepto de favorabilidad expedido por la dirección del CPMS ERE de Bucaramanga, para el otorgamiento de la libertad condicional
- Certificado de residencia expedido por la Junta de Acción Comunal del Barrio Caldas.

CONSIDERACIONES

Entra el Juzgado a establecer la viabilidad o no del sustituto de LIBERTAD CONDICIONAL deprecado por el interno AMAYA FERREIRA, mediante el análisis y valoración de los elementos fácticos y el acopio probatorio obrante en el expediente, así como de los presupuestos normativos establecidos por el Legislador para tal precepto.

Veamos entonces, como el Legislador exige para la concesión del sustituto de libertad condicional el cumplimiento efectivo de parte de la pena, adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario y que se demuestre arraigo familiar y social. Además, debe existir previa valoración de la conducta punible y en todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o el aseguramiento del pago de la indemnización¹.

¹ Art. código penal art. 64. Modificado art, 5 Ley 890/2004 7 de julio de 2004-. Modificado art. 25 ley 1453 de 2011- Modificado art.30 ley 1709 de 2014 20 de enero de 2014:
Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido los siguientes requisitos:
1. Que la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.
“(…)
En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante...”

En relación con el aspecto objetivo, la persona sentenciada debe haber cumplido mínimo las tres quintas partes de la pena que exige el artículo 30 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014 que modificó el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 previamente modificado por el artículo 5 de la Ley 890 del 7 de julio de 2004, toda vez que los hechos datan del 25 de diciembre de 2022, que para el sub lite sería de **14 MESES 12 DÍAS DE PRISIÓN**, quantum ya superado, si se tiene en cuenta que la sumatoria del tiempo físico y las redenciones de pena², arroja privación efectiva de la libertad DIECISIETE (17) MEMSES DOS (2) DÍAS DE PRISIÓN. No obra probanza sobre condena en perjuicios.

En cuanto al aspecto subjetivo, la norma en cita prevé el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión que permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena además la demostración del arraigo familiar y social; previa valoración de la conducta punible, siendo importante señalar al respecto que la Corte Constitucional, en sede de demanda de inconstitucionalidad, declaró exequible la expresión “*previa valoración de la conducta*” inserta en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, condicionada a que dicho discernimiento se efectúe por el Juez de penas considerando todas las situaciones abordadas por el Juzgador en la sentencia, sean favorables o desfavorables para acceder al sustituto penal, sin que para tal efecto se hayan estipulado los parámetros ni la forma del análisis.

Miramientos que conservan los preceptos jurisprudenciales del principio del *non bis in ídem* consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, y no atentan contra él, así lo destacó la sentencia C-757 de 2014 cuando sobre los argumentos planteados señala su validez y aplicación integral, así: “*El proceso penal tiene por objeto determinar la responsabilidad penal del sindicado por la conducta que le está siendo imputada en el proceso, e imponerle una pena de conformidad con una serie de circunstancias predicables de la conducta punible. Entre tanto, al juez de ejecución de penas le corresponde determinar si la ejecución de dicha pena es necesaria o no, una vez que la conducta ha sido valorada y la pena ha sido impuesta. Ello implica que no sólo se trata de causas diferentes, sino que el ejercicio de la competencia del Juez penal limita los alcances de la competencia del juez de ejecución de penas. En primer lugar, porque el juez de ejecución de penas no puede valorar de manera diferente la conducta punible, ni puede tampoco salirse del quantum punitivo determinado por el Juez Penal*”.

² 4 meses 11 días

En este caso advierte el Juzgado, que aun cuando se trata de una conducta que causa reproche pues su actuar se dirigió a maltratar física, verbal y psicológicamente a su pareja sentimental; lo que generó angustia y preocupación, comportamiento que hoy por hoy se contempla como una conducta excluida para el acceso a ciertos beneficios penales.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la valoración de la conducta condujo a fijar la pena partiendo del cuarto mínimo consecuencia del allanamiento a cargos, y se le concedió el descuento del 50% de la pena debido a la contribución del descongestionamiento judicial, y la aceleración del proceso con la consecuente disminución de los costos procesales, lo que redunda en su favor; y denota que para el Estado la conducta en los términos que se acordó no representa mayor prevención ni la gravedad suficiente que impida el otorgamiento del sustituto de Libertad Condicional.

Consideraciones que comparte este Despacho ejecutor de penas, sin embargo debe advertirse que se han de conservar los preceptos jurisprudenciales en pro de la no vulneración al principio del *NON BIS IN IDEM* y por otra parte se acentuará el análisis frente al tratamiento penitenciario del interno, cuyo origen fue la comisión de punible de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, al ser para ese momento necesario a efectos de lograr la concreción de los fines de readaptación social y reincorporación a actividades lícitas.

Lo anteriormente expuesto, en consonancia con los parámetros dictados por el máximo Tribunal Constitucional, cuando afirma: *“...No existe identidad total de los hechos en la medida en que, si bien el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad debe valorar la conducta punible, debe analizarla como un elemento dentro de un conjunto de circunstancias. Solo una de tales circunstancias es la conducta punible. Además de valorar la conducta punible, el juez de ejecución de penas debe estudiar el comportamiento del condenado dentro del penal, y en general considerar toda una serie de elementos posteriores a la imposición de la condena. Con fundamento en este conjunto de circunstancias, y no sólo en la valoración de la conducta punible, debe el Juez de ejecución de penas adoptar la decisión”*

Así como del pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a la obligatoriedad en la concesión del sustituto penal siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos de orden legal, así: *“...por lo tanto, la Corte debe concluir que en el tránsito normativo del artículo 64 del Código Penal sí ha habido modificaciones semánticas con impactos normativos. Por un lado, la nueva redacción le impone el deber al juez de otorgar la libertad condicional una vez verifique el cumplimiento de los requisitos, cuando antes le permitía no otorgarlos. Por otra parte, la nueva disposición amplía el*

objeto de la valoración que debe llevar a cabo el juez de ejecución de penas más allá del análisis de la gravedad de la conducta, extendiéndola a todos los aspectos relacionados con la misma.”

En consonancia del fin resocializador de la pena y la prevención especial de la misma, *“...el juez de ejecución de penas si bien puede tener en cuenta la conducta punible, la personalidad y antecedentes de todo orden para efectos de evaluar el proceso de readaptación social del condenado en procura de proteger a la sociedad de nuevas conductas delictivas, en todo caso, debe valorar la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional de los condenados”* ³

Continuando con el análisis frente al cumplimiento de las exigencias de orden subjetivo, es del caso precisar que AMAYA FERREIRA, ha descontado parte de la pena privativa de la libertad restándole cerca de 7 meses para el cumplimiento total de la condena, su comportamiento promedio puede calificarse en el grado de buena y aun cuando no se le han reconocido beneficios administrativos en la fase de tratamiento, presenta concepto favorable⁴ para el sustituto de trato.

Lo que demuestra no sólo su actitud de cambio frente a las circunstancias que lo llevaron al estado de privación actual, el buen proceso resocializador y de contera la posibilidad de otorgarle una oportunidad para retornar a la sociedad, a través del otorgamiento del sustituto de libertad condicional.

Frente al arraigo social y familiar que establece la norma en cita, se evidencia que AMAYA FERREIRA, cumple con el requisito que se enuncia al evidenciarse elementos de convicción de su pertenencia a un grupo familiar, como lo es el inmueble ubicado en la Calle 107 No 33-51 Barrio Alto Viento de Floridablanca, lugar en que residirá con su tía Flor Ángela Ferreira Tapias, tal como lo indicó en la declaración juramentada allegada a la foliatura; que permiten inferir su ánimo de permanecer en un lugar determinado, ligado por sus raíces familiares y sociales; y si bien no guarda relación con la consignada en la cartilla biográfica ha sido justificada por el interesado en tanto la que allí aparecía pertenece al sitio en que residía para el momento de su aprehensión física no así para la actualidad.

³ Sentencia T-640/17. MP.: Antonio José Lizarazo Campo.

⁴ Resolución del 410 023 del 13 de febrero de 2024 emanada de la Dirección del CPMS ERE de Bucaramanga



Desde luego, con el panorama descrito en precedencia, obligante resulta como conclusión la valoración armónica de los elementos antes reseñados bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad; pues qué otro camino habría de quedarle a aquella persona que con ocasión de la comisión de una conducta delictiva, se ha hecho merecedor de una condena intramural, a la luz de la que ha reflejado un comportamiento ejemplar, apto para su resocialización y reincorporación social, distinto a éste, es decir, la oportunidad de retornar al núcleo social con el otorgamiento del beneficio de marras.

Así las cosas, se suspenderá la ejecución de la pena por un periodo de prueba de 6 MESES 28 DÍAS, conforme lo dispuesto en el art. 64 del C.P., debiendo el favorecido presentarse ante este Juzgado cada vez que sea requerido, para lo cual, estará en la obligación de suministrar de manera fidedigna el lugar donde irá a residir para efectos de su localización, so pena de la revocatoria posterior de la gracia penal.

Igualmente deberán suscribir diligencia de compromiso en la que se le pongan de presente las obligaciones del artículo 65 del C.P. garantizadas mediante caución prendaria por valor de CIENTOCINCUENTA MIL PESOS (\$150.000) en efectivo, que serán consignados en la cuenta de depósitos judiciales número 68001-2037-002, que posee este Juzgado en el Banco Agrario de la ciudad, en tanto se advierte que los efectos de la pandemia se encuentran superados. Verificado lo anterior, se libraré la boleta de libertad para ante la Dirección del sitio de reclusión.

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA;

RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR que **OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA**, ha cumplido una penalidad de DIECISIETE (17) MESES DOS (2) DÍAS DE PRISIÓN, teniendo en cuenta la detención física más la redención de pena ya reconocida.

SEGUNDO.- CONCEDER a **OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA**, el sustituto de la libertad condicional, al darse a su favor los requisitos del artículo 64 del C.P.; Por ende, se suspenderá la ejecución de la pena por



un periodo de prueba de **6 MESES 28 DÍAS**, debiendo presentarse ante este Estrado Judicial cada vez que sea requerida, para lo cual, está en la obligación de manifestar la dirección exacta del sitio de ubicación, pues de lo contrario, él mismo cargaría con la responsabilidad de una eventual revocatoria.

TERCERO.- ORDENAR que **OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA**, suscriba diligencia compromisoria en la que se le pongan de presente las obligaciones del artículo 65 del C.P.; para garantizar el cumplimiento de las obligaciones se prestara **caución prendaria por valor de CIENTOCINCUENTA MIL PESOS (\$150.000) en efectivo**, como se motivó; que serán consignados en la cuenta de depósitos judiciales número 68001-2037-002, que posee este Juzgado en el Banco Agrario de la ciudad.

CUARTO. LÍBRESE boleta de libertad a favor de **OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA**, ante la Dirección del CPMS ERE de Bucaramanga, una vez cumplido lo anterior.

QUINTO. - ENTERAR a las partes que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


ALICIA MARTÍNEZ ULLOA
Juez

AR/

**JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

**DILIGENCIA DE COMPROMISO
LIBERTAD CONDICIONAL
NI – 10289 (CUI 68001 6000 159 2022 8701 00)**

En _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____, ante funcionario del INPEC – CPAMS GIRÓN-, el (la) señor(a) **OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA** identificado (a) con cedula de ciudadanía _____, se comprometió a cumplir las siguientes obligaciones previstas en el Art. 65 del Código Penal:

1. Informar al Despacho todo cambio de residencia
2. Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos.
3. Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo que se demuestre insolvencia económica,
4. Presentarse periódicamente ante la Secretaría de los Juzgados de Ejecución de Penas de Bucaramanga, cada vez que sea requerido, dentro de un período de prueba de **6 MESES 28 DÍAS**.
5. Observar buena conducta social y familiar.
6. No salir del país sin previa autorización.

Se advierte al comprometido, que en caso de cometer un nuevo delito o de violar cualquiera de las obligaciones antes de la extinción definitiva del período de prueba, le será revocado el beneficio que le fue concedido a efectos de purgar la pena que le fue impuesta.

Fija su residencia en la siguiente dirección
_____,
celular _____ y correo
electrónico _____.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, firman los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada.

El (la) Comprometido (a),

OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA

El notificador (a),

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
68001-3187002

Bucaramanga, dos (2) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	REPOSICION AUTO NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL (no repone)						
RADICADO	NI 10289 (CUI 68001 6000 159 2022 08701 00)			EXPEDIENTE	FÍSICO		
					ELECTRÓNICO		x
SENTENCIADO (A)	OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA			CÉDULA	91 110 648		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPMS ERE DE BUCARAMANGA						
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	NO APLICA						
BIEN JURIDICO	FAMILIA	LEY906/2004	X	LEY 600/2000		LEY 1826/2017	
PETICIÓN PARTE	X			OFICIO			

ASUNTO

Resolver el recurso de reposición y en subsidio de apelación que interpuso el sentenciado **OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA** **identificado con cédula de ciudadanía No 91 110 648**, en contra del proveído de 21 de febrero de 2024, mediante el cual se le negó el sustituto de libertad condicional.

ANTECEDENTES

El Juzgado Primero Penal Municipales con Funciones Mixtas de Girón, emitió sentencia de fecha 30 de enero de 2023, en la que condenó a OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA, a la pena de 24 MESES DE PRISIÓN e INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS por el término de la pena de prisión, como autor responsable del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Se le negaron la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

Mediante auto interlocutorio del 21 de febrero de 2024 este Despacho Judicial resolvió negar a AMAYA FERREIRA el sustituto de libertad condicional, por cuanto no logró demostrar la existencia de arraigo familiar y social.

DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, el sentenciado AMAYA FERREIRA, la recurrió y procedió a aclarar la inconsistencia frente al vínculo afectivo con la señora Flor Ángela Ferreira Tapias, así como la motivación para variar su domicilio, lo que coadyuva su madre Lucila Ferreira de Amaya y la víctima Mayra Alejandra Ferreira Olivar. Consecuentemente invocó el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

Revisada la providencia objeto de inconformismo y los documentos que allegó AMAYA FERREIRA, para sustentar la alzada, consistentes en: **i.** Declaración extra juicio rendida por las Sra. Mayra Alejandra Ferreira Olivar, compañera sentimental del interno quien desiste de la demanda de violencia. **ii.** Declaración de la Sra. Lucila Ferreira Viuda de Amaya, madre del interno. **iii.** Declaración de Flor Ángela Ferreira Tapias, tía del interno quien manifiesta su deseo de recibirlo en la dirección ubicada en la calle 107 No 33-51 Barrio Alto Viento de Floridablanca; se logra colegir el cumplimiento de la cortapisa en que se fundó la negativa en disputa, y consecuentemente se viabiliza el acceso al sustituto de libertad condicional que invocó el interno.

No obstante lo anterior, se debe precisar que aun cuando la documentación previamente enunciada pudo variar la motivación que condujo a considerar la negativa del beneficio legal, lo cierto es que la alzada en comento no es el mecanismo para complementar los vacíos en cuanto a certificados y documentos propios del estudio para la concesión del sustituto penal, y por consiguiente la decisión que hoy se impugnó se fundó sobre la base de los documentos que reposaban en el expediente al momento que se adoptó la determinación, igualmente se destaca que no al momento de la valoración reposaba en el expediente información que en nada definía la incoherencia planteada entre la información traída a estudio con los datos del proceso y menos aún su arraigo a un lugar.

Luego, resultaba evidente la ausencia en mentada oportunidad del soporte documental que en este momento aportó el interesado.

Adicionalmente, por cuanto se trata de circunstancia nuevas, esto es, que no se conocían al momento de adoptar la decisión, habrán de ser valoradas para determinar la viabilidad del beneficio; ergo se insiste en lo expresado en el auto recurrido, al ajustarse a los fundamentos fácticos y jurídicos para el momento en que se profirió y en tal virtud, este Despacho mantendrá la posición inicial de no conceder por el momento el sustituto de libertad condicional.

Finalmente, no se concederá el recurso de apelación dado que en el expediente y con posterioridad a la decisión impugnada se allegan documentos que permiten la viabilidad del beneficio y que serán estudiados inmediatamente resultando inane pronunciamiento de segunda instancia por evidente sustracción de materia.

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA;

RESUELVE

PRIMERO. - NO REPONER la decisión de fecha 21 de febrero de 2024, mediante el cual esta Oficina Judicial negó el sustituto de LIBERTAD CONDICIONAL a **OSCAR RODOLFO AMAYA FERREIRA**, de acuerdo a la parte motiva.

SEGUNDO. - NO CONCEDER el recurso de apelación conforme a lo expuesto en las motivaciones.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ALICIA MARTÍNEZ ULLOA
JUEZ

AR/

Rad. 68081.60.00.135.2022.00982 N.I. 10798 DIGITAL

**JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Revisada la decisión de fecha 26 de marzo de 2024 por medio de la cual se resolvió la solicitud de libertad condicional del penado FELIX ENRIQUE APARICIO CANTILLO, se advierte que se cometió un error en el numeral segundo de la parte resolutive pues se consignó el nombre de EINSEHOWER URIBE CAPACHO, siendo el nombre correcto FELIZ ENRIQUE APARICIO CANTILLO, por lo tanto el numeral segundo de la decisión enunciada quedará así:

“SEGUNDO.- NEGAR a FELIX ENRIQUE APARICIO CANTILLO el sustituto de la libertad condicional al no darse a su favor los requisitos del artículo 5 de la Ley 890 de 2004 modificado por la Ley 1709 de 2014, conforme se expuso en la motiva de este proveído.”

La anterior corrección hace parte de la decisión del 26 de marzo de 2024.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ALICIA MARTÍNEZ ULLOA
Juez

JUANDGC

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	REDENCION DE PENA – CONCEDE						
RADICADO	NI 15958 (CUI 11001 6100 000 2019 00004 00)			EXPEDIENTE	FISICO		2
					ELECTRONICO		
SENTENCIADO (A)	EDGAR BEDOYA CORTES			CEDULA	13 565 299		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPMS ERE BUCARAMANGA						
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	NO APLICA						
BIEN JURIDICO	ORDEN ECONOMICO Y SOCIAL – SEGURIDAD PÚBLICA - PATRIMONIO ECONOMICO	LEY906/2004	X	LEY 600/2000		LEY 1826/2017	
PETICIÓN PARTE	X			OFICIO			

ASUNTO

Resolver la redención de pena en relación con el sentenciado **EDGAR BEDOYA CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía número **13 565 299**.

ANTECEDENTES

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Valledupar, el 25 de junio de 2020, condenó a EDGAR BEDOYA CORTES, a la pena principal de **118 MESES DE PRISIÓN**, MULTA de 975 SMLMV e INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS por el término de la pena principal, como responsable de los delitos de **CONCIERTO PARA DELINQUIR; APODERAMIETNO DE HIDROCARBUROS EN TENTATIVA Y CONSUMADO; HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO; Y FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO**. Se le negaron la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria

Su detención data del 3 de diciembre de 2018, por lo que lleva en privación de la libertad 64 MESES 1 DÍA DE PRISIÓN. Actualmente se halla **detenido en el CPMS ERE de Bucaramanga** por este asunto.

PETICIÓN

Se allegan documentos para redención de pena con oficio 2021EE0227979 del 5 de enero de 2022¹, contentivos de certificado de cómputos y calificaciones conductas para reconocimiento de redención de pena del BEDOYA CORTES, que expidió el CPMS BUCARAMANGA.

CONSIDERACIONES

Entra el Juzgado a establecer la viabilidad de otorgamiento de la redención de pena, conforme al certificado de cómputos que remitió el penal, para lo que procede a detallar los mismos. En cuanto a redención de pena se avalarán;

CERTIFICADO	FECHA	TRABAJO	ESTUDIO	ENSEÑANZA
17533971	Agosto – Sept/19		225	
17645632	Oct -Dic/19		303	
17755503	Enero – Marzo/20		354	
17849776	Abril – Junio/20		252	
18003733	Oct -Dic/20		318	
18092162	Enero -Marzo/21		366	
18197181	Abril -Junio/21		360	
18285074	Julio -Sept/21		342	
	TOTAL		2520	
	Días redimidos	210 = 7 meses		

Lo que le redime su dedicación intramuros en actividades de estudio en 7 MESES DE PRISIÓN, que al sumarle la redención de pena reconocida en autos anteriores -10 MESES-, arroja un total redimido de 17 MESES DE PRISIÓN.

Y al revisar la evaluación de la conducta del interno, se tiene que se calificó como ejemplar y actividad sobresaliente, tal y como se plasma en los certificados del Consejo de Disciplina, lo que permite reconocer la redención de pena que se enuncia, en atención a lo normado en el Código Penitenciario y Carcelario sobre este aspecto.

Así las cosas, al sumar la detención física y las redenciones de pena, se tiene una penalidad cumplida de 81 MESES 1 DÍA DE PRISIÓN.

¹ Recibido por en el correo institucional y advertido con ocasión de vinculación de tutela,
Palacio de Justicia "Vicente Azuero Plata", oficina 338
Tel.: (7) 6339300 | E-mail correspondencia : csjepbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
Horario de atención: 8:00 am – 4:00 pm



Finalmente, solicítese al CPMS ERE de Bucaramanga, envíe el certificado de cómputos del periodo julio a septiembre/2020 que no fue allegado, así mismo enero/2024 a la fecha, para estudio de redención de pena.

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA;

RESUELVE

PRIMERO. - OTORGAR a **EDGAR BEDOYA CORTES**, una redención de pena por ESTUDIO de **7 MESES DE PRISIÓN**, por los meses a que se hizo alusión en la parte motiva de este proveído, para un total redimido de **17 MESES DE PRISIÓN**.

SEGUNDO. – DECLARAR que **EDGAR BEDOYA CORTES**, ha cumplido una penalidad de **81 MESES 1 DÍA DE PRISIÓN**, al sumar la detención física y las redenciones de pena.

TERCERO. – SOLICITAR al CPMS ERE de Bucaramanga, envíe el certificado de cómputos del periodo julio a septiembre/2020 que no fue allegado, así mismo enero/2024 a la fecha, conforme a las motivaciones.

CUARTO. - ENTERAR a las partes que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALICIA MARTÍNEZ ULLOA
JUEZ

AR/

**JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Bucaramanga, 4 de abril de 2024

Oficio No **0701**

15958 (CUI 11001 6100 000 2019 00004 00)

Señor:
DIRECTOR
CPMSM DE BUCARAMANGA

Dando cumplimiento a lo ordenado por la señora Jueza SEGUNDA DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de la ciudad, mediante auto de la fecha, comedidamente me permito solicitarle se sirva REMITIR con destino a este Despacho los certificados de cómputo por actividades de trabajo, estudio y enseñanza y las respectivas calificaciones de conducta, del periodo julio a septiembre/2020 que no fue allegado, así mismo enero/2024 a la fecha, para estudio de **REDENCIÓN DE PENA**, respecto del sentenciado **EDGAR BEDOYA CORTES**, identificado con **cédula de ciudadanía número 13 565 299**.

Atentamente,



ANDREA Y. REYES ORTIZ
Sustanciadora



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, tres (03) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO

ASUNTO	REDENCIÓN DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL							
RADICADO	68.001.60.00.159.2021.05309 NI 2985				EXPEDIENTE	FISICO	X	
						ELECTRONICO	-	
SENTENCIADO	JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ				CEDULA	91.505.801		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPAMS GIRÓN							
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	NO APLICA PORQUE SE ENCUENTRA INTRAMURAL							
BIEN JURIDICO	FAMILIA	LEY 906/2004	-	LEY 600/2000	-	LEY 1826/2017	X	

Se resuelve la solicitud de **LIBERTAD CONDICIONAL** elevada por el condenado **JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 91.505.801.

ANTECEDENTES

- Este despacho vigila la **PENA ACUMULADA** de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN** fijada al sentenciado **JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ** en virtud de las siguientes condenas:
 - JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE FLORIDABLANCA** el 1 de diciembre de 2021 al haberlo hallado responsable del delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA** por hechos que datan del 27 de agosto de 2021 por los que lo condenó a 40 meses de prisión, negando la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Radicado 68.001.60.00.159.2021.05309 NI 2985.
 - JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE FLORIDABLANCA** el 29 de diciembre de 2021 al haberlo hallado responsable del delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA** por hechos que datan del 7 de agosto de 2021 por los que lo condenó a 36 meses de prisión, negando la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Radicado 68.001.60.00.159.2021.05002 NI 36512.
- La acumulación jurídica de penas fue decretada por este despacho en proveído del 1 de septiembre de 2023 (fl.55)



3. El sentenciado se encuentra privado de la libertad por cuenta de esta actuación desde el **27 de agosto de 2021**, actualmente recluso en la **CPAMS GIRÓN**.
4. A la fecha existe reconocimiento de redención de pena al sentenciado por un quantum de 6 meses 6 días (fl. 116v).
5. El expediente ingresa al despacho con documentos de arraigo allegados por el sentenciado, e información suministrada por los Juzgados que emitieron las sentencias condenatorias en la que indican que no se apertura trámite de reparación integral (fls. 130, 135-141)

CONSIDERACIONES

Entra el Juzgado a establecer la viabilidad o no de conceder el sustituto de **LIBERTAD CONDICIONAL** deprecado por el condenado **JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ** mediante el análisis y valoración de los elementos fácticos y el acopio probatorio obrante en el expediente, así como de los presupuestos normativos establecidos por el Legislador para tal precepto.

En relación con el aspecto objetivo, y como los hechos acaecieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014¹, se aplicará por favorabilidad la mencionada normatividad, que modificó el art. 64 del Código Penal Colombiano que exigía para acceder a la libertad condicional el cumplimiento de un monto mayor de la pena, previa valoración de la gravedad de la conducta punible, además del pago de la multa y perjuicios, en tanto que la actual Ley 1709 de 2014 señala lo siguiente:

“El juez, previa valoración de la conducta punible, cederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familia y social.

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba.

¹ 20 de enero de 2014



Cuando éste sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.”

Al examinar estas condiciones concurrentes, se tiene que la pena acumulada fijada al sentenciado es de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN**, por lo que las 3/5 partes de su pena son **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN**, el sentenciado ha estado privado de la libertad desde el 27 de agosto de 2021, llevando a la fecha una pena física cumplida de 31 meses 6 días, que sumados a 6 meses 6 días de redención de pena reconocida dentro del presente expediente, arroja un total de **TREINTA Y SIETE (37) MESES DOCE (12) DÍAS DE PRISIÓN**, lo que permite afirmar sin temor a equivocaciones que el quantum exigido por el legislador para estudiar la viabilidad de la libertad condicional ya se superó.

No es del caso acreditar el pago de la multa pues la norma no lo exige además de no haber sido condenado a ello, y en relación a los perjuicios los **JUZGADOS 1 y 2 PENALES MUNICIPALES CON FUNCIONES MIXTAS DE FLORIDABLANCA** informaron a este despacho que dentro de las actuaciones que vigila este despacho no se inició trámite de incidente de reparación integral, lo que deviene en afirmar que no existe condena en perjuicios.

De igual manera la norma en cita prevé el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión que permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena, frente a este punto este despacho evidencia que durante el tiempo en que el condenado se ha encontrado privado de su libertad intramuros ha tenido un buen comportamiento al ser calificada su conducta en BUENA.

Esta situación, en las condiciones que se expone denota su interés en resocializarse, indicando no sólo su actitud de cambio frente a las circunstancias que lo llevaron al estado de privación actual sino un buen proceso y de contera la posibilidad de otorgarle una oportunidad para retornar a la sociedad para cumplir con las obligaciones que le asisten como miembro de la misma.

Frente al aspecto subjetivo, es del caso examinar ahora la valoración de la conducta punible, como lo exige la normatividad vigente a aplicar, art. 30 de la Ley 1709 de 2014, que reformara el artículo 64 del Código Penal. En el sublite, se trata de conductas completamente reprochables, precisamente porque los delitos objeto de sanción penal ambas de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA** atenta contra el núcleo esencial de la sociedad, esto es, la FAMILIA, pudiendo presumirse que es una persona a la que se le dificultad tener dominio propio, sin embargo, dicha situación ya fue objeto de valoración en cada una de las sentencias proferidas en su contra y el motivo basilar por el cual se le negaré los subrogados penales, considerando que el tiempo que ya ha satisfecho de manera intramural junto el buen comportamiento que ha mantenido al interior del panóptico, dan cuenta de su cambio de actitud y la viabilidad de otorgar una segunda oportunidad, amén de evidenciar que el lugar en que va a residir no es el mismo en el que ocurrieron los hechos, y su núcleo familiar no estaría conformado por la víctima – padre del condenado-, sino por una prima hermana.

Así proponiendo la conservación de los preceptos jurisprudenciales en pro de la no vulneración al principio del non bis in ídem y que es preciso tener en cuenta el



análisis del tratamiento penitenciario del condenado, que para el presente caso como se advirtió, se torna destacado frente al actuar que en su momento tuvo para que se le endosara la condena, lo que permiten de contera la posibilidad de otorgarle una oportunidad para regresar a la sociedad, pues estas condiciones permiten inferir que en el actual momento procesal no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena a efectos de lograr la concreción de los fines de readaptación social y reincorporación.

Continuando con el análisis frente al cumplimiento de las exigencias para el tanpreciado sustituto frente al arraigo social y familiar que establece la norma en cita, para el presente caso se tiene que el señor **JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ** cuenta con arraigo en la **Vereda Carrizal, Finca La Guadua Casa 2 del Municipio de Lebrija, Santander**, lugar en el que la referencia familiar e incluso recibo de servicio público dan cuenta de su existencia y de los lazos que unen al sentenciado a ese lugar.

Así las cosas, resulta viable acceder al sustituto penal solicitado por lo que se suspenderá la ejecución de la pena por un periodo de prueba de **22 MESES 18 DÍAS**, que corresponde al tiempo que le falta para el cumplimiento de la pena conforme lo dispuesto en el art. 64 del C.P., debiendo el favorecido presentarse ante la autoridad que lo requiera por este asunto.

Igualmente deberá suscribir diligencia de compromiso en la que se le pongan de presente las obligaciones del artículo 65 del C.P. garantizadas mediante caución prendaria en efectivo (no susceptible de póliza) por la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000)**, que serán consignados en la cuenta de depósitos judiciales número 68001-203-7005, que posee este Juzgado en el Banco Agrario de la ciudad, monto que se fija en virtud de la gravedad de las conductas punibles que le fueron endilgadas al sentenciado.

Verificado lo anterior, se librará la boleta de libertad para ante la Dirección de **CPAMS GIRÓN**, lugar en el que actualmente se encuentra privado de la libertad.

En virtud de lo expuesto, **EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA**,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER al señor **JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ** Identificado con la cédula de ciudadanía No 91.505.801 el sustituto de la **LIBERTAD CONDICIONAL**, al darse a su favor los requisitos del artículo 64 del C.P., por ende, se suspenderá la ejecución de la pena por un periodo de prueba de **22 meses 18 días**, previo pago de caución prendaria y suscripción de diligencia de compromiso, debiendo presentarse ante este Estrado Judicial cada vez que sea requerido.

SEGUNDO.- ORDENAR que **JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ** Identificado con la cédula de ciudadanía No 91.505.801 suscriba diligencia compromisoria en la que se le pongan de presente las obligaciones del artículo 65 del C., y cancele caución prendaria por la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000)**, en **efectivo**, que serán consignados en la cuenta de depósitos judiciales número



68001-203-7005, que posee este Juzgado en el Banco Agrario de la ciudad, no siendo susceptible la garantía a través de póliza judicial.

TERCERO.- Una vez cumplido lo anterior **LÍBRESE BOLETA DE LIBERTAD** ante **CPAMS GIRÓN** en favor de **JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ** Identificado con la cédula de ciudadanía No 91.505.801.

CUARTO.- DECLARAR que a la fecha el condenado **JOSUE ALEXANDER NIÑO PÉREZ** Identificado con la cédula de ciudadanía No 91.505.801 ha cumplido una pena de **TREINTA Y SIETE (37) MESES DOCE (12) DÍAS DE PRISIÓN** entre detención física y redenciones de pena hasta ahora reconocidas.

QUINTO.- ENTERAR a las partes que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUGO ELEÁZAR MARTÍNEZ MARÍN
JUEZ

JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
BUCARAMANGA

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	Redención de pena						
RADICADO	NI. 8544 CUI 68001600025820090077900			EXPEDIENTE	FISICO		X
					ELECTRONICO		
SENTENCIADO (A)	PABLO COBOS ARDILA			CEDULA	91071147		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPAMS GIRÓN						
BIEN JURIDICO	Contra la Libertad y el Pudor sexual	LEY906/2004	X	LEY 600/2000		LEY 1826/2017	

MOTIVO DE LA DECISIÓN

Resolver la solicitud de redención de pena deprecada a favor de PABLO COBOS ARDILA identificado con C.C. 91071147, quien se encuentra privado de la libertad en el CPAMS GIRÓN.

CONSIDERACIONES

1.- PABLO COBOS ARDILA, cumple una pena de 438 meses de prisión, en virtud de la acumulación jurídica de penas de fecha 22 de julio de 2020 por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, en razón de las siguientes sentencias:

1.1.- La proferida el 27 de noviembre de 2009, por el Juzgado Séptimo Penal Del Circuito Con Funciones De Conocimiento De Bucaramanga, con rad: 159-2009-00779, a la pena de 240 meses de prisión, como autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo.

1.2.- La emitida el 26 de julio de 2019, por el Juzgado Noveno Penal Del Circuito Con Funciones De Conocimiento De Bucaramanga, con rad: 68001-6000-258-2009-01732, a la pena de 294 meses de prisión, como autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con acto sexual abusivo. Hechos del 3 junio 2009.

2.- En auto de la fecha el Despacho avocó conocimiento de la presente causa de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022 y CSJAA23-156 del 12 de abril de 2023. Hechos de 2009 y 2010.

3.- REDENCIÓN DE PENA

Para efectos de redención de pena se allegan los siguientes cómputos:

CERTIFICADO No.	PERIODO		HORAS CERTIFICADAS	ACTIVIDAD	REDIME	
	DESDE	HASTA			HORAS	DÍAS
18777885	01/10/2022	31/12/2022	366	ESTUDIO	366	30.5
TOTAL, REDENCIÓN						30.5

- *Certificados de calificación de conducta*

Nº	PERIODO	GRADO
CONSTANCIA	13/08/2022 – 12/04/2023	EJEMPLAR

3.1.- Las horas certificadas y que han sido referidas anteriormente le representan al sentenciado 30.5 días (1 mes 0.5 días) de redención por las actividades realizadas en el penal; atendiendo que la conducta del mismo ha sido calificada en el grado ejemplar y su desempeño como sobresaliente, por lo que procede dicho reconocimiento con fundamento en lo normado en los artículos 82, 97 y 98 de la ley 65 de 1993.

3.2.- El ajusticiado ha estado privado de la libertad por este proceso desde el 5 de octubre de 2009 por lo que a la fecha ha descontado un término físico de 173 meses 29 días.

3.3.- En sede de redenciones deben sumarse las siguientes: i) 16 meses 24 días el 16 de septiembre de 2014 ii) 3 meses 2 días el 23 de junio de 2015 iii) 4 meses 16 días el 18 de mayo de 2017 iv) 3 meses 2 días el 17 de octubre de 2017 v) 5 meses el 29 de octubre de 2018 vi) 1 mes 22 días el 27 de febrero de 2019 vii) 3 meses 20 días el 22 de julio de 2020 viii) 3 meses 2 días el 26 de enero de 2021 ix) 5 meses 3.5 días el 16 de febrero de 2023 x) 3 meses 2 días el 22 de febrero de 2023 y xi) 30.5 días en el presente auto, que arrojan un total de 50 meses 4 días.

3.4.- Así las cosas, en total – sumado el tiempo físico y las redenciones atrás señaladas – el sentenciado ha descontado la cantidad de 224 meses 3 días.

4.- REDOSIFICACIÓN DE LA PENA.

4.1. En esta oportunidad el sentenciado solicita la redosificación de la pena con fundamento en la sentencia C-14 de 2023 expedida por la Corte Constitucional, invocando aplicación del principio de favorabilidad.



4.2. Desde ya ha de señalarse que la solicitud elevada no está llamada a prosperar por las siguientes razones:

I. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 906 de 2004, “. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen: 1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan. 2. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona. 3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria. 4. De lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza. 5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad. 6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad. Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inimputables. En ejercicio de esta función, participarán con los gerentes o directores de los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los condenados inimputables y ordenará la modificación o cesación de las respectivas medidas, de acuerdo con los informes suministrados por los equipos terapéuticos responsables del cuidado, tratamiento y rehabilitación de estas personas. Si lo estima conveniente podrá ordenar las verificaciones de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o privadas. 7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal. 8. De la extinción de la sanción penal. 9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexecutable o haya perdido su vigencia...”

II. Así mismo, el artículo 51 de la Ley 65 de 1993 establece: “ARTÍCULO 51. JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. <Artículo modificado por el artículo 42 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales. En los establecimientos donde no existan permanentemente jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad estos deberán realizar al menos dos visitas semanales a los establecimientos de reclusión que le sean asignados. El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, además de las funciones contempladas en el Código de Procedimiento Penal, tendrá las siguientes: 1. Verificar las condiciones del lugar o del establecimiento de reclusión donde deba ubicarse la persona condenada, repatriada o trasladada. 2. Conocer de la ejecución de la sanción penal de las personas condenadas, repatriadas o trasladadas, cuya ubicación le será notificada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto por el cual se disponga la designación del establecimiento. 3. Hacer seguimiento a las actividades dirigidas a la integración social del interno. Para ello deberá conceptuar periódicamente sobre el desarrollo de los programas de trabajo, estudio y enseñanza. 4. Conocer de las peticiones que los internos o apoderados formulen en relación con el Reglamento Interno y tratamiento penitenciario en cuanto se refiera a los derechos y beneficios que afecten la ejecución de la pena...”

4.2.1.- Así las cosas, ha de puntualizarse ante todo que el Juez Ejecutor carece de competencia para reformar, aclarar o modificar la sentencia, a menos que se trate de la aplicación del principio de favorabilidad, ante el advenimiento de una nueva normatividad que favorezca los intereses del sentenciado, lo cual no acontece en el presente evento, pues lo pretendido es que se modifique la pena que le fue impuesta en la sentencia de condena, en virtud de la sentencia C-014 de 2023.

4.2.2.- Resulta preciso traer a colación la sentencia de la H. Corte Constitucional C-581 del 6 de junio de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentarías, en el que expone sobre el tema de la favorabilidad lo siguiente: “Dicho principio que constituye una excepción a la regla general según la cual las leyes rigen hacia el futuro, surge de la máxima “favoralia amplianda sunt, odiosa restringenda”

(lo favorable debe ampliarse y lo odioso restringirse), y solamente tiene operancia cuando existe sucesión de leyes.”

4.2.3.- Del mismo modo, la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia ha establecido que, para que se pueda aplicar el principio de favorabilidad deben concurrir los siguientes requisitos: i) sucesión o simultaneidad de dos o más leyes en el tiempo; ii) regulación de un mismo supuesto de hecho, pero que conlleva consecuencias jurídicas distintas; y iii) permisibilidad de una disposición frente a la otra¹.

4.2.4.- En virtud de lo anterior, este Despacho ha de manifestar que la primera de las subreglas establecidas por la H. Corte Suprema de Justicia no se haya satisfecha, esto es, que desde la fecha en que ocurrieron los hechos, a la actual ha existido una sucesión de leyes que deben ser analizadas para determinar la viabilidad o no de alguna de ellas en favor del condenado, frente al quantum de la pena que le fuere impuesta. Es más, la norma que en algunos apartes fue declarada inexecutable ni siquiera estaba vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, y su aplicación no podía darse por tener efectos adversos frente al ajusticiado.

4.2.5.- En la sentencia en la que se fundamenta la petición de redosificación, esto es, la C-014 del 2 de febrero de 2023, La Corte Constitucional resolvió demandas en contra de algunos artículos de la Ley 2197 de 2022 y, para este caso concreto, el artículo 5 de dicha ley que modificó el artículo 37 de la ley 599 de 2000 en cuanto a la duración máxima de la pena de prisión para los tipos penales. Refiriéndose a la norma demandada, señaló La Corte:

“127. En consecuencia, la Sala Plena manifiesta que el aumento de máximo de la pena de prisión de cincuenta (50) a sesenta (60) años es contraria al ordenamiento constitucional. Ahora bien, la Sala advierte que la mera eliminación de la expresión “sesenta (60) años”, sin otra consideración, sería un remedio perjudicial habida cuenta de que ello supondría que la pena de prisión en Colombia no tendría un límite o tope máximo. Es decir, se dejaría un vacío normativo que generaría inseguridad jurídica e, incluso, escenarios de mayor desprotección del derecho a la dignidad humana ante la falta de un límite máximo en la pena.

128. En ese sentido, la Sala considera que lo correcto es acudir a la figura de la reviviscencia² y, en consecuencia, retomar el tope previsto antes de la modificación introducida por la Ley 2197 de 2022, de

¹ Sentencia STP14140-2018, Radicado 101256.

² En la Sentencia C-286 de 2014, reiterada en las sentencias C-133 de 2021 y C-084 de 2022, la Corte sintetizó las reglas acerca la reincorporación o reviviscencia de normas derogadas así: “(i) **La reincorporación o reviviscencia de normas derogadas por mandatos que fueron declarados inexecutable hace parte del ordenamiento jurídico nacional, desde mucho antes de la Constitución de 1991, como parte de la discusión por los efectos jurídicos de las sentencias hacia el pasado -ex tunc- o hacia el futuro -ex nunc- y la salvaguarda de la seguridad jurídica.** || (ii) **La reviviscencia de normas se ha presentado igualmente como solución a los problemas que plantea el vacío jurídico creado por la derogación de normas que regulan, sobretodo de manera integral, una determinada materia, conllevando igualmente problemas de seguridad jurídica.** || (iii) **En los primeros pronunciamientos se asumió la postura de una reviviscencia automática de las normas derogadas por las declaratorias de inexecutable de aquellas que las reemplazaron, pero con posterioridad, se fijaron algunas condiciones para que se aplicara esta figura jurídica, como que se presentaran los argumentos para la necesidad de reincorporación, por razones de (a) creación de vacíos normativos; (b) vulneraciones a los derechos fundamentales; (c) necesidad para garantizar la supremacía de la Constitución Política, y (d) siempre y cuando las normas reincorporadas sean constitucionalmente admisibles.** || (iv) **La jurisprudencia ha dejado sentado que la reincorporación o reviviscencia de normas no tienen un carácter declarativo en la parte resolutoria de la sentencia, sino que la Corte se debe limitar a comprobar si para el caso en estudio se cumplen los requisitos para que pueda configurarse la reviviscencia de preceptos derogados.** || (v) **Finalmente, la Sala reitera que la procedencia de la reincorporación debe ser analizada en cada caso concreto, a partir de los criterios de vacíos normativos o afectación de derechos fundamentales”.**



"cincuenta (50) años". Lo anterior, por las siguientes razones. Primero, porque es un término establecido previa deliberación democrática respecto del cual no se ha elevado reparo constitucional. Y, segundo, porque al revisar con detenimiento la reforma pretendida a través de la Ley 2197 de 2022, esta versaba únicamente sobre el término del máximo de la pena de prisión, y no sobre todo el artículo 37 del Código Penal, de modo que lo único que estaría haciendo la Corte es retomar el texto íntegro del artículo 37, previa modificación.

129. Decisión. La Corte Constitucional declarará inexecutable la expresión "sesenta (60) años", contenida en el artículo 5 de la Ley 2197 de 2022, que modificó el artículo 37 de la Ley 599 de 2000. En su lugar, el tope máximo de la pena de prisión seguirá siendo de cincuenta (50) años, como estaba concebido antes de la modificación introducida por la Ley 2197 de 2022."

4.2.6.- En virtud de lo anterior, el pedimento no puede estar llamado a prosperar, dado – se repite – que la conducta por él cometida se falló conforme a la legislación vigente al momento de comisión de esta, habiéndose aplicado las normas establecidas para la época de los hechos sin que alguna de ellas haya sido declarada inexecutable. Incluso la pena que actualmente purga el sentenciado es inferior a los 50 años de prisión, a lo que se suma que es producto de una acumulación jurídica - concurso de delitos - y de acuerdo al inciso 2° del art. 31 del C. Penal, la pena máxima para estos eventos no puede superar los 60 años de prisión.

4.2.7.-Así las cosas, la pena impuesta a COBOS ARDILA se ajusta a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 599 de 2000 que prevé como límite máximo de la pena en Colombia 50 años, "excepto en los casos de concurso" y, por tanto, no procede redosificación alguna.

5.- OTRAS DETERMINACIONES

5.1. Se oficie al CPAMS GIRÓN para que sin alterar el orden de las solicitudes remita los certificados de cómputos y conductas del señor PABLO COBOS ARDILA de los periodos comprendidos entre el 01/01/2023 a la fecha.

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA:

RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER al PL PABLO COBOS ARDILA como redención de pena UN MES CERO PUNTO CINCO DÍAS (1 mes 0.5 días), por las actividades realizadas al interior del penal.

SEGUNDO: DECLARAR que a la fecha el condenado PABLO COBOS ARDILA ha cumplido una pena de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MESES TRES DÍAS (224 meses 3 días), teniendo en cuenta la detención física y las redenciones de pena reconocidas.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA**

SIGCMA

TERCERO: NEGAR la solicitud de redosificación de pena invocada por PABLO COBOS ARDILA, de conformidad con lo expuesto en la motiva.

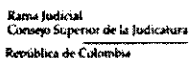
CUARTO: DESE cumplimiento al acápite "OTRAS DETERMINACIONES"

QUINTO: ENTERAR a las partes que contra la presente decisión proceden los recursos de Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL ANDRÉS MORENO CASTAÑEDA

Juez



SIGCMA

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

Bucaramanga, uno (1) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	REDENCIÓN DE PENA						
RADICADO	NI. 9801 CUI 68001310700220100013600			EXPEDIENTE	FÍSICO		X
					ELECTRÓNICO		
SENTENCIADO (A)	PEDRO JOSE NIÑO ORTIZ			CÉDULA	5722863		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPAMS GIRÓN						
BIEN JURIDICO	Contra la Seguridad Pública	LEY906/2004		LEY 600/2000	x	LEY 1826/2017	

Resolver solicitud de redención de pena en favor de PEDRO JOSE NIÑO ORTIZ identificado con C.C. 5722863. privado de la libertad en el CPMS BARRANCABERMEJA.

1. El ajusticiado PEDRO JOSE NIÑO ORTIZ cumple pena de 398 meses 19 días de prisión impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga el 3 de febrero de 2012 por el delito de concierto para delinquir en concurso con desaparición forzada, según hechos ocurridos el 22 de enero de 1999; a la par que le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria NI. 9801 CUI 68001310700220100013600. Decisión que confirmó la sala Penal del H. Tribunal Superior de esta ciudad, con la modificación de la pena antes referida.

2.- Este Juzgado asumió la vigilancia de la aludida condena el 18 de marzo de 2024, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022¹ y CSJAA23-156 del 12 de abril de 2023² por reparto de expedientes que hiciere el Juzgado Quinto homólogo.

3.1. A fin de redimir pena se allegan los siguientes cálculos:

CERTIFICADO	PERIODO		HORAS CERTIF.	ACTIVIDAD	REDENCIÓN	
	DESDE	HASTA			HORAS	DÍAS
18864319	01/01/2023	21/02/2023	328	TRABAJO	328	20.5

¹ Expedido por el Consejo Superior de la Judicatura

² Expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander

³ Folios 176-179



18864319	22/02/2023	31/03/2023	162	ESTUDIO	162	13.5
18929718	01/04/2023	18/05/2023	186	ESTUDIO	186	15.5
18929718	19/05/2023	30/06/2023	296	TRABAJO	296	18.5
19035048	01/07/2023	30/09/2023	632	TRABAJO	632	39.5
TOTAL REDENCIÓN						107.5

Certificados de calificación de conducta

Nº	PERIODO	GRADO
421-0313	01/01/2023 a 31/03/2023	EJEMPLAR
421-0671	01/04/2023 a 30/06/2023	EJEMPLAR
421-0889	01/07/2023 a 30/09/2023	EJEMPLAR

3.2.- Las horas certificadas y que han sido referidas anteriormente le representan al sentenciado 107.5 días (3 meses 17.5 días) de redención por las actividades realizadas en el penal; atendiendo que la conducta del mismo ha sido calificada en el grado de buena y ejemplar y su desempeño como sobresaliente, por lo que procede dicho recorocimiento con fundamento en lo normado en los artículos 82, 97 y 98 de la ley 65 de 1993.

3.3.- Si en cuenta se tiene que el mencionado se encuentra privado de la libertad desde el 22 de octubre de 2009, a la fecha ha descontado como pena física 173 meses 10 días.

3.4 En sede de redenciones se le han reconocido al PL las siguientes: (i) 260 días, el 28 de enero de 2015 (ii) 143 días el 23/06/2015 (iii) 8 días el 23 de noviembre de 2015 (iv) 234 días, el 31 de mayo de 2016, v) 98 días, el 1 de noviembre de 2016, vi) 48 días, el 25/05/2017 (vii) 48.5 días, el 14 de agosto (viii) 59 días, el 27 de marzo de 2018 (ix) 78 días el 12 de agosto de 2019 (x) 60 días, el 21 de octubre de 2019 (xi) 63 días el 08 de julio de 2020 (xii) 36 días, el 15 de julio de 2020 (xiii) 97 días el 22 de febrero de 2021 (xiv) 81 días, el 3 de noviembre de 2021 (xv) 67.5 días, el 8 de junio de 2022 (xvi) 65 días el 10 de agosto de 2022 (xvii) 26 días, el 18 de noviembre de 2022 (xix) 52 días el 5 de mayo de 2023 y 107.5 días en este auto, arroja un total de tiempo redimido de 54 meses 11.5 días

3.5.- Así las cosas, sumado el tiempo de detención física con las redenciones de pena reconocidas - arrojan que ha descontado un total de 227 meses 21.5 días.

Por lo expuesto, el JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA;

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER a favor de PEDRO JOSE NIÑO ORTIZ una redención de pena de TRES MESES DIECISIETE PUNTO CINCO DÍAS (3 meses 17.5 días) por las actividades realizadas al interior del penal; de conformidad con lo expuesto en la motiva.



Ramo Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA**

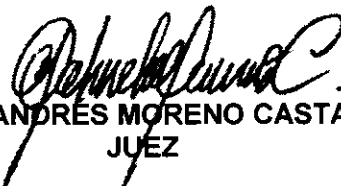
SIGCMA

Unidad de Gestión

SEGUNDO: DECLARAR que a la fecha el sentenciado PEDRO JOSE NIÑO ORTIZ ha cumplido una pena de DOSCIENTOS VEINTISIETE MESES VEINTIUNO PUNTO CINCO DÍAS (227 meses 21.5 días), teniendo en cuenta la detención física y la redención de pena reconocida.

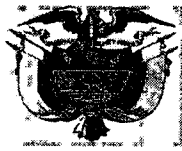
TERCERO: ENTERAR a las partes que contra esta decisión proceden los recursos ordinarios de Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


GABRIEL ANDRÉS MORENO CASTAÑEDA
JUEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, cuatro (04) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

ASUNTO	REDENCION DE PENA Y LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA						
RADICADO	NI 26149 (CUI 68001 6000 159 2021 06415)			EXPEDIENTE	FISICO		X
					ELECTRONICO		
SENTENCIADO (A)	JHON WILLIAM GUTIERREZ JAIMES			CEDULA	1.007.733.363		
CENTRO DE RECLUSIÓN	EPAMS GIRÓN						
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	NO APLICA						
BIEN JURIDICO	CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO	LEY906/2004	X	LEY 600/2000		LEY 1826/2017	

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve la solicitud de redención de pena y libertad por pena cumplida a favor de **JHON WILLIAM GUTIERREZ JAIMES** Identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.007.733.363.

ANTECEDENTES

- Este despacho vigila la pena de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN** impuesta el 19 de enero de 2022 por el **JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA** al haberlo hallado responsable del delito de **HURTO CALIFICADO**.
- Se logra evidenciar, que el condenado se encuentra privado de la libertad por cuenta de estas diligencias desde el día **28 DE OCTUBRE DE 2021**, hallándose actualmente recluido en el **EPAMS GIRÓN**.
- El día de hoy ingresa el expediente con solicitud de redención de pena y libertad por pena cumplida.

CONSIDERACIONES

1. REDENCIÓN DE PENA.

Con el fin de resolver la solicitud de redención de pena impetrada por el condenado, se observa dentro del expediente la siguiente información.

CERTIFICADO	FECHA	TRABAJO	ESTUDIO	CONDUCTA	FOLIO
19149081	01-01-2024 a 31-01-2024	---	126	Sobresaliente	73
TOTAL		---	126		

En consecuencia, procede la redención de la pena por **ESTUDIO** así:

ESTUDIO	126/ 12
TOTAL	10.5 días

Luego acreditado el lleno de las exigencias atrás expuestas por concepto de **ESTUDIO** abonará a **JHON WILLIAM GUTIERREZ JAIMES** un quantum de **DIEZ PUNTO CINCO (10.5) DIAS DE PRISIÓN**.

2. LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA

El despacho procede a revisar el tiempo de privación efectiva de la libertad, a fin de establecer si ha cumplido en su integridad el monto de la pena correspondiente a **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN**.

En aras de establecer el cumplimiento de la pena, se hace necesario determinar el tiempo físico que lleva privado de la libertad el condenado, las redenciones concedidas, a saber:

❖ **Días Físicos de Privación de la Libertad**

28 de octubre de 2021 a la fecha —————> 29 meses 6 días

❖ **Redención de Pena**

Concedida auto anterior —————> 5 meses 7 días
Concedida presente auto —————> 10.5 días

Total Privación de la Libertad	34 meses 23.5 días
---------------------------------------	------------------------------

Revisado el diligenciamiento se observa que **JHON WILLIAM GUTIERREZ JAIMES** a la fecha lleva cumplida una pena de **TREINTA Y CUATRO (34) MESES VEINTITRES PUNTO CINCO (23.5) DÍAS** de prisión sumando la detención física más la redención de pena reconocida, lo que dista de la pena que le fuera impuesta por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga el día 19 de enero de 2022, esto es, **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN**.



En tal sentido se despachará negativamente la solicitud de libertad por pena cumplida al sentenciado **JHON WILLIAM GUTIERREZ JAIMES**, debiendo continuar purgando la pena que le fue impuesta.

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER a **JHON WILLIAM GUTIERREZ JAIMES** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.007.733.363 una redención de pena por estudio de **10.5 DÍAS**, que se abonara al tiempo que lleva en prisión.

SEGUNDO. - DECLARAR que **JHON WILLIAM GUTIERREZ JAIMES** ha cumplido a la fecha una penalidad de **TREINTA Y CUATRO (34) MESES VEINTITRES PUNTO CINCO (23.5) DÍAS**, teniendo en cuenta la detención física y redención de pena que lleva hasta la fecha.

TERCERO. - NEGAR LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA al condenado **JHON WILLIAM GUTIERREZ JAIMES**, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

CUARTO. - ENTERAR a las partes que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUGO ELEAZAR MARTÍNEZ MARÍN
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, cuatro (04) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	PRISIÓN DOMICILIARIA POR PADRE CABEZA DE FAMILIA							
RADICADO	NI 33662 (CUI 68001 6000 159 2019 07085)				EXPEDIENTE	FISICO		X
						ELECTRONICO		
SENTENCIADO (A)	ROBINSON EDUARDO HERNANDEZ GARZA				CEDULA	19.925.849		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPMS BUCARAMANGA							
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	NO APLICA							
BIEN JURIDICO	CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO	LEY906/2004	X	LEY 600/2000		LEY 1826/2017		

ASUNTO

Se resuelve la solicitud de **PRISIÓN DOMICILIARIA POR PADRE CABEZA DE FAMILIA** solicitada por el condenado **ROBINSON EDUARDO HERNANDEZ GARZA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.925.849, la cual estaba a la espera del informe socio- económico y familiar para poder decidir de fondo.

ANTECEDENTES

1. Este juzgado vigila la pena de **CIENTO NUEVE (109) MESES DE PRISIÓN** impuesta al sentenciado **ROBINSON EDUARDO HERNANDEZ GARZA** el 8 de junio de 2020 por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA** al haberlo hallado responsable del delito de **HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO**, negándosele los subrogados penales.
2. Se logra evidenciar que el condenado se encuentra privado de la libertad por cuenta de estas diligencias desde el **24 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, actualmente recluso en el **CPMS BUCARAMANGA**.
3. El expediente ingreso al despacho dado que aún está pendiente resolver de fondo la prisión domiciliaria por padre cabeza de familia.



CONSIDERACIONES

PRISION DOMICILIARIA POR PADRE CABEZA DE FAMILIA

Entra el juzgado a establecer la viabilidad o no del sustituto de la pena privativa de la libertad deprecada por el interno **ROBINSON EDUARDO HERNANDEZ GARZA** mediante el análisis y valoración de los elementos fácticos y el acopio probatorio obrante en el expediente, así como de los presupuestos normativos establecidos por el legislador para tal precepto.

En cuanto a la pretensión del sustituto penal atendiendo la condición de padre cabeza de familia, el artículo 461 de la Ley 906 de 2004 faculta a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para ordenar la ejecución de la pena previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva que consagra el artículo 314 ibídem¹. En este orden de ideas se permite el análisis de la concesión o no del sustituto de la pena privativa de la libertad, para el caso específico en las circunstancias contempladas en la mencionada preceptiva numeral 5.

Sobre el tema, la condición de padre cabeza de hogar se ha definido por el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por la Ley 1232 de 2008 así:

“... es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar “

Al respecto se sustentará la decisión en precedente reciente sobre la materia, esto es, auto AP1504 DE 2019 radicación No 53220 del 30 de abril de 2019, siendo Magistrado Ponente el Doctor Luis Guillermo Salazar Otero, en las que entre otras reitera la posición que se viene asumiendo de la sentencia SU 388 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, la cual ha precisado:

“para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de

¹ “La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos:

1. (...)

5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor de doce (12) años o que sufre incapacidad mental permanente, siempre y cuando haya estado bajo el cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio... Sentencia C-154/07 Corte constitucional. Declara INEXEQUIBLES las expresiones “de doce (12) años” y “mental”, contenidas en el numeral 5° del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial que ayude de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.

Precisamente es el último requisito el que no se cumple en el caso concreto, pues de los elementos materiales probatorios no queda acreditado que verdaderamente exista una deficiencia sustancial de los demás miembros de la familia para velar por el cuidado de su menor hija Kailiany Monserrath Hernández Rincón de 6 años de edad.

Ha de indicarse que con mediana facilidad se desprende de lo aportado en el informe emitido por la comisaria de familia del Municipio de Charta Santander que la hija menor del sentenciado no se encuentra desamparada, ya que cuentan con la protección y cuidado de sus abuelos paternos como lo son la señora Margarita Garza Castañeda y Campo Elias Hernández Garza, dado que es ellos son quienes le han brindado a la menor alimentación, manutención, educación y apoyo moral, encontrándose así suplidas las necesidades mínimas ante el cambio de roles que la situación de privación de libertad necesariamente conlleva, de igual manera se tuvo conocimiento a través de la entrevista realizada a la señora en mención que los dos laboran en actividades de campo, que de hay proviene los recursos para los gastos de manutención.

Del informe allegado a este juzgado se puede extraer que la residencia donde viven los papás del sentenciado junto con su hija y un sobrino de 10 años de edad está ubicada en la zona rural de Charta vereda perico finca el palomar, la cual consta de piso en cemento, dos habitaciones, unidad sanitaria con baldosa, lavadero, lavadora, cocina con estufa de gas, pasillo y sala.

Sobre la hija del sentenciado se tiene que la menor K.M.H.R tiene 6 años estudia en la escuela rural perteneciente al Instituto Agrícola Charta cursando primero grado de primaria, teniendo un buen rendimiento escolar, encontrándose acorde a su edad en el nivel correspondiente de estudio. De igual forma la señora Margarita Garza Castañeda manifiesta que tanto ella como sus nietos están afiliadas a la red prestadora de salud de la NUEVA EPS en el régimen subsidiado.

Es de resaltar el informe que se rinde por parte de la comisaria de familiar del Municipio de Charta Santander, en donde entre otras cosas se analizó la situación actual de la hija del sentenciado **ROBINSON EDUARDO HERNANDEZ GARZA**, y se obtuvo que sus papás es quienes han estado al cuidado su hija, no encontrándose ella gracias a esas personas en condiciones de riesgo o peligro para su vida y en sano desarrollo psicosocial, mostrándose estas en disposición de continuar cuidando a la



menor, al igual se supo que la menor se encuentra escolarizada, cuenta con afiliación a seguridad social en el régimen subsidiado y se encuentra en buen estado de salud.

Ahora bien, con la información suministrada por parte de la comisaria de familia del Municipio de Charta se puede evidenciar que la hija del sentenciado se encuentra con los abuelos paternos siendo ellos unas personas responsables, quienes ven y protegen de ella, observándose entonces que la infante cuenta con los cuidados suficientes para que su formación sea la más adecuada, razones más que suficientes para que este juzgado niegue el respectivo beneficio, en la medida que no se acredita la condición de padre cabeza de familia del sentenciado.

En virtud de lo expuesto, **EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA,**

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR a **ROBINSO EDUARDO HERNANDEZ GARZA** identificado con la cédula de ciudadanía número 19.925.849 la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, de conformidad con los planteamientos expuestos en la parte motiva de éste auto.

SEGUNDO: ENTERAR a las partes que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUGO ELEAZAR MARTINEZ MARIN
Juez

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, cuatro (04) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	PRISION DOMICILIARIA							
RADICADO	NI 33869 (CUI 68001 400 159 2020 01652)			EXPEDIENTE	FISICO		X	
					ELECTRONICO			
SENTENCIADO (A)	JAIR SEBASTIAN COBOS SANTANA			CEDULA	1.005.149.948			
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPMS BUCARAMANGA							
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	NO APLICA							
BIEN JURIDICO	CONTRA LA VIDA	LEY906/2004	X	LEY 600/2000		LEY 1826/2017		

ASUNTO

Resolver nuevamente sobre la **EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN LUGAR DE RESIDENCIA O MORADA DEL CONDENADO** en aplicación a lo normado en el art. 38 G de la ley 599 de 2000, adicionado por el art. 28 de la ley 1709 de 2014, elevada por el defensor del sentenciado **JAIR SEBASTIAN COBOS SANTANA** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.005.149.948.

ANTECEDENTES

1. Este despacho Judicial vigila la pena de **CIENTO VEINTE (120) MESES DE PRISIÓN** al señor **JAIR SEBASTIAN COBOS SANTANA** impuesta por el **JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA** el 9 de octubre de 2020 al haberlo hallado responsable del delito de **HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA AGRAVADO EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO**.
2. Se logra evidenciar, que el condenado se encuentra privado de la libertad por cuenta de estas diligencias desde el día **28 DE FEBRERO DE 2020**, hallándose actualmente en el **CPMS BUCARAMANGA**.
3. El defensor del condenado solicita se le conceda a su prohijado la prisión domiciliaria.

CONSIDERACIONES

PRISIÓN DOMICILIARIA

Procede el Despacho a estudiar los presupuestos contenidos en artículo 28 de la Ley 1709 de 2014 que adicionó el artículo 38G a la Ley 599 de 2000, para verificar la procedencia o no del beneficio aludido en favor del señor **JAIR SEBASTIAN COBOS SANTANA**, en procura de favorecer la reintegración del condenado a la sociedad, mediante el cambio de internamiento, de los muros del establecimiento penitenciario a los de su morada, siempre y cuando se cumplan unos puntuales requisitos y haya ejecutado la mitad de la pena impuesta.

Con la expedición de la Ley 1709 de 2014, que con el artículo 28 adicionó el artículo 38G a la Ley 599 de 2000, la pena privativa de la libertad se cumplirá en



el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido los siguientes requisitos, a saber:

1. Que el condenado hubiese cumplido la mitad de la condena impuesta
2. Se demuestre arraigo familiar y social del sentenciado.
3. Se garantice mediante caución el cumplimiento de las obligaciones que la misma norma señala
4. No pertenecer el enjuiciado al grupo familiar de la víctima ni haber sido condenado por los delitos que el mismo art. 38G enlista.

En primer término se tiene el requisito objetivo según el cual el sentenciado debe haber cumplido mínimo la mitad de la condena, aún **NO** se halla satisfecho, dado que a la fecha lleva cumplida una pena fiscal de 49 meses 6 días (su detención data desde el 28 de febrero de 2020) más 10 meses 18.5 días de redenciones de pena reconocidas dentro del presente proceso, lo cual arroja un total de **CINCUENTA Y NUEVE (59) MESES VEINTICUATRO PUNTO CINCO (24.5) DIAS DE PRISIÓN** los cuales no alcanzan a la mitad de la pena impuesta conforme se exige para acceder a este beneficio, considerando que se halla condenado a una pena de **CIENTO VEINTE (120) MESES DE PRISIÓN** en consecuencia para continuar con el análisis del sustituto que invoca debe haber cumplido al menos 60 meses de prisión.

En tales circunstancias, para acceder al sustituto de la pena intramural por la de prisión es preciso haber descontado la mitad de la pena impuesta, lo que no encuentra acreditado en cabeza del condenado, por el momento no se hace viable el otorgamiento del beneficio.

En razón y mérito de lo expuesto, el **JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA,**

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR la solicitud de prisión domiciliaria que trata en el artículo 38G elevada por el sentenciado **JAIR SEBASTIAN COBOS SANTANA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.005.149.948, por no satisfacer los requisitos establecidos por el legislador.

SEGUNDO. - ENTERAR a las partes que contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUGO ELEÁZAR MARTÍNEZ MARÍN
JUEZ

JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, tres (03) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	Redención de pena y prisión domiciliaria							
RADICADO	NI 37524 (CUI 68001610606320200000600)			EXPEDIENTE	FISICO			
					ELECTRONICO		X	
SENTENCIADO (A)	Yeferson Andrés Rodríguez Almeida			CEDULA		1.102.392.855		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPMS BUCARAMANGA							
BIEN JURIDICO	Salud Pública	LEY906/2004	X	LEY 600/2000		LEY 1826/2017		

MOTIVO DE LA DECISIÓN

Resolver la solicitud de redención de pena y prisión domiciliaria deprecada a favor de YEFERSON ANDRÉS RODRÍGUEZ ALMEIDA identificado con la C.C. 1.102.392.855, quien se encuentra privado de la libertad en el CPMS BUCARAMANGA.

CONSIDERACIONES

- 1.- YEFERSON ANDRES RODRIGUEZ ALMEIDA, cumple una pena de 32 meses de prisión y 1 SMLMV, impuesta por el juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento en sentencia del 26 de agosto de 2022, por el delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hechos ocurridos en noviembre de 2021. Se negó la suspensión condicional de ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
- 2.- En auto del 7 de septiembre de 2023 se avocó conocimiento de la presente causa de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022¹ y CSJAA23-156 del 12 de abril de 2023².

3. DE LA REDENCIÓN DE PENA:

3.1 Para efectos de redención de pena se allegan los siguientes cómputos:

CERTIFICADO No.	PERIODO		HORAS CERTIFICADAS	ACTIVIDAD	REDIME	
	DESDE	HASTA			HORAS	DÍAS
19100442	01/10/2023	31/12/2023	438	ESTUDIO	438	36,5
TOTAL REDENCIÓN						36,5

- *Certificados de calificación de conducta:*

¹ Expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
² Expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.

N°	PERIODO	GRADO
CONSTANCIA	25/07/2023 a 24/01/2024	BUENA/EJEMEPLAR

3.2.- Las horas certificadas y que han sido referidas anteriormente le representan al sentenciado 36,5 (1 mes 6,5 días) de redención por las actividades realizadas en el penal; atendiendo que la conducta del mismo ha sido calificada en el grado de buena y su desempeño como sobresaliente, por lo que procede dicho reconocimiento con fundamento en lo normado en los artículos 82, 97 y 98 de la ley 65 de 1993.

4.- ESTABLECE DETENCIÓN INICIAL

4.1.- Conforme la petición allegada por el ajusticiado en la que solicita que se aclare el tiempo de detención física se tiene que:

4.2.- Al sentenciado se le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria por cuenta de este proceso el 15 de febrero de 2022, misma que perdió vigencia el 26 de agosto de 2022, día en el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad emitió la sentencia condenatoria en la que dispuso negar la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, quiere decir lo anterior, que cuenta con una detención inicial equivalente a 6 meses 11 días, conforme se estableció en auto del 30 de enero de 2023 por el Juzgado Segundo Homólogo de esta ciudad cuando legalizó la captura.

Posteriormente fue capturado el 29 de enero de 2023 dado que se libró orden de captura No. 000582 y fue enviado al CPMS BUC. Por ello, desde el 29 de enero de 2023 a la fecha, Rodríguez Almeida ha descontado adicionalmente 14 meses 5 días, que en suma con lo anterior, ha descontado en tiempo físico un total de 20 meses 16 días.

4.3.- En sede de redenciones debe sumarse las reconocidas en los siguientes autos; (i) del 01 de diciembre de 2023 por 22,5 días, (ii) la del pasado 18 de diciembre por 34,5 días y la que hoy se reconoce por 36,5 días, lo que arroja un total de 3 meses 3.5 días.

4.3.-Así las cosas, en total – sumado el tiempo físico y las redenciones atrás señaladas - el rematado ha descontado la cantidad de 23 meses 19.5 días.

5. DE LA PRISION DOMICILIARIA:

5.1.- El sentenciado solicitó que se le otorgue la prisión domiciliaria de conformidad con el artículo 38 G de la ley 599 de 2000, que reza:



“ARTÍCULO 38G. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2o del artículo 376 del presente código...” (negrilla y subraya del juzgado)

A su vez los numerales 3 y 4 del artículo 38 B adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, a los cuales remite esta norma, señalan:

“3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado...En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.....4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial; b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia; c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad...”

5.2.- Respecto del cumplimiento de los requisitos delimitados por el legislador se tiene lo siguiente:

5.2.1.- En lo que respecta al requisito objetivo del cumplimiento de la mitad de la condena, esto es, **16 meses**, y a la fecha ha descontado entre detención física y redenciones de pena un tiempo equivalente a **23 meses 19.5 días**, monto que a la luz de la norma permite afirmar que ha cumplido con este requisito objetivo.

5.2.2.- Igualmente debe decirse que el delito el que se encuentra condenado, a saber, Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, no se enmarca dentro de las prohibiciones del artículo 28 de la ley 1709 de 2014 que adicionó el artículo 38 G de la ley 599 de 2000, puesto que la norma señala como excluidos para acceder el beneficio los “delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2 del artículo 376”. La conducta por la que se declaró penalmente responsable a Yeferson Andrés Rodríguez fue tipificada en el art. 376 inciso 2°.

5.2.3.- En lo que respecta al arraigo, la Sala Penal del máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria ha establecido que supone “la existencia de un vínculo del procesado con el lugar donde reside, lo cual se acredita con distintos elementos de juicio, entre otros, tener una residencia fija y estable, vivir en ella junto



con la familia y estar presto a atender el requerimiento de las autoridades..."³, concepto que reiteró y aclaró para el específico tema que se debate, en los siguientes términos:

"...se relaciona con el vínculo -en este caso del sentenciado-, con el lugar donde reside o residirá, y no de la zozobra e intranquilidad de la comunidad o, de la amenaza que constituye para la sociedad el otorgamiento del subrogado penal de la prisión domiciliaria, categorías distintas al actual instituto jurídico en estudio (establecido en los artículos 38B y 38G del CP) y que más bien se inscriben en el modificado artículo 38 (antes de la reforma introducida por la Ley 1709 de 2014) del mismo estatuto sustantivo de las penas, como quiera que allí sí se decía: "que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena..."⁴.

5.2.4.- En cuanto a la demostración de la existencia de arraigo familiar y social se allegó (i) cartilla biográfica del interno, (ii) declaración de Gladys Carillo en la que manifiesta que es familiar y acudiente del sentenciado y además es la propietaria de la casa ubicada en la dirección Carrera 16ª No. 6A – 10 del Barrio Cabecera del Llano ubicada en Piedecuesta -lugar donde el ajusticiado estará en caso de concederse la prisión domiciliaria-, (ii) la referencia familiar de María Teresa Almeyda Carrillo quien es la tía del penado y da buena fe que es buena persona; (iii) la certificación de Ana Milena Jerez Puerta, quien funge como la Secretaria de Gobierno y Participación ciudadanía del municipio de Piedecuesta; (iv) el servicio de la electrificadora a nombre de Gladys Carillo del inmueble ubicado en la Carrera 16ª No. 6ª -10 de Piedecuesta (S); (v) el certificado de registraduría civil de nacimiento del menor A.S.R.F; (vi) el reconocimiento de la comunidad terapéutica nuevos horizontes suscrita por el Dragoneante Heriberto Flórez Moreno; (vi) el certificado a nombre del sentenciado por su participación y cumplimiento de las actividades propuestas en el programa Cadena de vida, lo que conlleva a determinar que este requisito se superó.

5.2.5.- Si bien el numeral 4, literal b, del art. 38B del C. Penal señala: "b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;", debemos entender que esta es una de las obligaciones que adquiere el beneficiario de la prisión domiciliaria y cuyo cumplimiento se garantiza con la caución que se le imponga como lo exige el citado numeral.

5.2.6.- Corolario de lo anterior, este despacho concederá la prisión domiciliaria a YEFERSON ANDRÉS RODRIGUEZ ALMEIDA, conforme las motivaciones que se dejaron expuestas en precedencia, previa caución prendaria por valor de un salario mínimo legal mensual vigente (1SMLMV) susceptibles de póliza que deberá consignar en la cuenta judicial del Banco Agrario de este Despacho No. 680012037007; con la cual garantice las siguientes obligaciones:

"a) No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial;

³ Sentencia del 25 de mayo de 2015. Rad. 29581 (SP6348-2015)

⁴ Sentencia del 23 de agosto de 2017. Rad. 93423 (STP13145-2017)



- b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;
- c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;
- d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del INPEC para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”

5.2.7.- Advertir al amparado que, si violare cualquiera de las anteriores obligaciones, sería revocado el mecanismo y tendría que cumplir la pena de forma intramural⁵. Igualmente, ordenar que el sustituto de la prisión domiciliaria se acompañe del brazalete electrónico, si no existiere disponibilidad del mismo, deberá hacerse efectivo el sustituto y, posteriormente proveerse el mecanismo referido.

5.2.8.- Librar ORDEN DE CONDUCCIÓN al lugar de residencia, el cual se fijará en la Carrera 16ª No. 6ª – 10 del Barrio Cabecera del Llano en la ciudad de Piedecuesta, una vez el ajusticiado cumpla con los compromisos a su cargo de prestar caución y suscribir diligencia de compromiso.

6.- OTRAS DETERMINACIONES

Por el CSA de estos Juzgados solicítase al CPMS Bucaramanga los documentos para el trámite de la libertad condicional del ajusticiado YEFERSON ANDRÉS RODRÍGUEZ ALMEIDA, lo anterior sin alterar el orden interno correspondiente.

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA;

RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER a YEFERSON ANDRÉS RODRÍGUEZ ALMEIDA, por redención de pena UN MES SEIS PUNTO CINCO DÍAS (1mes 6.5 días) por las actividades realizadas durante la privación de su libertad.

SEGUNDO: DECLARAR que YEFERSON ANDRÉS RODRÍGUEZ ALMEIDA ha cumplido una penalidad de VEINTITRÉS MESES DIECINUEVE PUNTO CINCO DÍAS (23 meses 19.5 días) teniendo en cuenta la detención física y la redención concedida.

⁵ Artículo 486 de la Ley 600 de 2000.



TERCERO: CONCEDER el sustituto de la prisión domiciliaria a YEFERSON ANDRÉS RODRÍGUEZ ALMEIDA, de conformidad con las motivaciones que se dejaron expuestas en precedencia, debiéndose imponer las obligaciones mencionadas y prestar caución prendaria por valor de un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) susceptibles de póliza que deberá ser consignada en la cuenta judicial No. 680012037007 del Banco Agrario a nombre de este Juzgado; con la cual garantice las obligaciones referidas en la parte motiva de la decisión. **ADVERTIR** al sentenciado que si violare cualquiera de las anteriores obligaciones será revocado el mecanismo y tendrá que cumplir la pena de forma intramural. **ORDENAR** que el sustituto de la prisión domiciliaria se acompañe del brazalete electrónico, si no existiere disponibilidad del mismo, deberá hacerse efectiva la prisión domiciliaria y, posteriormente proveerse el mecanismo referido.

CUARTO: LIBRAR ORDEN DE CONDUCCIÓN al lugar de residencia, el cual se fijará en la Carrera 16A No. 6ª – 10 del Barrio Cabecera del Llano en la ciudad de Piedecuesta, una vez el ajusticiado cumpla con los compromisos a su cargo de prestar caución y suscribir diligencia de compromiso.

QUINTO: DÉSE cumplimiento al acápite de otras determinaciones.

SEXTO: ENTERAR a las partes que contra esta decisión proceden los recursos ordinarios de Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


GABRIEL ANDRÉS MORENO CASTAÑEDA
Juez

JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	Redención de pena y libertad condicional						
RADICADO	NI 37524 RAD: 68001610606320200000600			EXPEDIENTE	FISICO		X
					ELECTRONICO		
SENTENCIADO (A)	GERARDO ALONSO CORREDOR CASTILLO			CEDULA	1.097.609.998		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPMS BUCARAMANGA						
BIEN JURIDICO	Salud pública		LEY	906 DE 2004	X	600 DE 2000	

MOTIVO DE LA DECISIÓN

Resolver solicitud de redención de pena elevada en favor del sentenciado GERARDO ALONSO CORREDOR CASTILLO, identificado con C.C. 1.097.609.998, privado de la libertad en el CPMS BUCARAMANGA.

CONSIDERACIONES

- 1.- GERARDO ALONSO CORREDOR CASTILLO, cumple una pena de 48 meses de prisión y multa de 62 SMLMV, impuesta por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento en sentencia del 26 de agosto de 2022, por el delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hechos ocurridos el 15 de febrero de 2022. Se negó la suspensión condicional de ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
- 2.- En auto del 7 de septiembre de 2023 se avocó conocimiento de la presente causa de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022¹ y CSJAA23-156 del 12 de abril de 2023².

3.- REDENCIÓN DE PENA

Para efectos de redención de pena se allegan los siguientes cómputos:

CERTIFICADO No.	PERIODO		HORAS CERTIFICADAS	ACTIVIDAD	REDIME	
	DESDE	HASTA			HORAS	DÍAS
19092015	01/10/2023	31/12/2023	321	ESTUDIO	321	26.75
TOTAL REDENCIÓN						26.75

- Certificados de calificación de conducta

Nº	PERIODO	GRADO
----	---------	-------

¹ Expedido por el Consejo Superior de la Judicatura
² Expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.

CONSTANCIA	28/10/2022 a 27/01/2024	BUENA/EJEMPLAR
------------	-------------------------	----------------

3.1.- Las horas certificadas y que han sido referidas anteriormente le representan al sentenciado 26.75 días de redención por las actividades realizadas en el penal; atendiendo que la conducta del mismo ha sido calificada en el grado buena/ejemplar y su desempeño como sobresaliente, por lo que procede dicho reconocimiento con fundamento en lo normado en los artículos 82, 97 y 98 de la ley 65 de 1993.

3.2.- El justiciado ha estado privado de la libertad por este proceso desde el 15 de febrero de 2022, por lo que a la fecha ha descontado un término físico de 25 meses 19 días.

3.3.- En sede de redenciones se tendrá en cuenta la reconocida el pasado 01 de diciembre por 3 meses 6.5 días, y la de la presente fecha por 26.75 días, lo que arroja un total de 4 meses 3.25 días.

3.4.- Así las cosas, en total – sumado el tiempo físico y las redenciones atrás señaladas – el rematado ha descontado la cantidad de 29 meses 22.25 días.

4.- DE LA LIBERTAD CONDICIONAL:

4.1.- En esta oportunidad se solicita la libertad condicional del enjuiciado acompañada de los siguientes documentos (i) cartilla biográfica, (ii) certificados de calificación de conducta, (iii) Resolución N° 410-00383 del 05 de marzo de 2024 y; (iv) arraigos sociales y familiares.

4.2.- Es competencia de los Jueces de Ejecución de Penas resolver de fondo lo concerniente a la libertad condicional, prevista en el artículo 30 de la ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 de la ley 599 de 2000, en el que; previa valoración de la gravedad de la conducta punible, se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena, (ii) que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena, (iii) que se demuestre el arraigo familiar y social y (iv) que se repare la víctima o se asegure el pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo se demuestre insolvencia económica.

4.3.- Al unísono la Sala Penal del máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria decantó sobre el instituto jurídico de la libertad condicional, lo siguiente:

“...El artículo 64 del Código Penal (modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014), con la exequibilidad condicionada declarada por la Corte Constitucional en la sentencia CC C–757–2014, enseña que la finalidad del subrogado de la libertad condicional es permitir que el condenado pueda cumplir por fuera del centro de reclusión parte de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia, cuando la conducta punible cometida, los aspectos favorables que se desprendan del análisis

efectuado por el juez de conocimiento en la sentencia –en su totalidad–, el adecuado comportamiento durante el tiempo que ha permanecido privado de la libertad y la manifestación que el proceso de resocialización ha hecho efecto en el caso concreto –lo cual traduce un pronóstico positivo de rehabilitación–, permiten concluir que en su caso resulta innecesario continuar la ejecución de la sanción bajo la restricción de su libertad (artículo 64 numeral 2° del código penal)...Sólo de esa forma se hace palpable la progresividad del sistema penitenciario, cuya culminación es la fase de confianza de la libertad condicional, que presupone la enmienda y readaptación del delincuente y efectiviza su reinserción a la sociedad, lográndose la finalidad rehabilitadora de la pena. La perspectiva en clave de libertad principalmente apuesta por las posibilidades de resocialización o reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva, acorde a máximas de rehabilitación, mientras la visión de seguridad apunta a su exclusión social, propias de políticas intimidatorias e inocuizadoras o de aislamiento del condenado, que contrarrestan su reintegro a las dinámicas comunitarias...”³

4.4.- En el caso concreto, sobre el cumplimiento del requisito objetivo no existe inconveniente alguno, dado que CORREDOR CASTILLO cumple una condena de 48 meses de prisión, por lo que las 3/5 partes equivalen a **28 meses 24 días**, quantum ya superado, conforme quedó plasmado en antecedencia, dado que el condenado ha descontado **29 meses 22.25 días** de prisión, por lo que se declara cumplido este requisito.

4.5.- A efectos de valorar el aspecto subjetivo, obra la Resolución N°410 00383 del 05 de marzo de 2024 expedida por el Consejo de Disciplina del CPMS BUCARAMANGA, en el que se emitió concepto favorable para conceder la libertad condicional al sentenciado, de igual forma, se allegó cartilla biográfica en la que se denota que su conducta fue calificada en el grado de buena y ejemplar, este último que se mantiene desde el 23/07/2023, lo que refleja su proceso de resocialización progresivo, por lo que debe considerarse superado este aspecto del requisito subjetivo.

4.6.- En lo concerniente al segundo aspecto del ingrediente subjetivo, a saber, la valoración de la conducta punible, al efectuar el juicio de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la necesidad de que el sentenciado continúe ejecutando la pena privativa de la libertad en el establecimiento de reclusión, si bien es cierto que, no puede obviarse la vulneración al bien jurídico de **Salud Pública**, tampoco resulta viable dejar de lado lo decantado por el Alto Tribunal Constitucional en Sentencia C-757 de 2014 que declaró exequible la expresión contenida en el art. 30 de la Ley 1709 de 2014, a través del cual se adujo que la valoración de la conducta punible que debe realizar el juez executor debe sujetarse a las circunstancias, elementos y consideraciones dadas por el juez de conocimiento en la sentencia condenatoria, sean favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional, de forma precisa se refirió que:

“48. En primer lugar, es necesario concluir que una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible de las personas condenadas para decidir acerca de su libertad condicional es exequible a la luz de los principios del non bis in ídem, del juez natural (C.P. art. 29) y de separación de poderes (C.P. art. 113) ...50. Sin embargo, sí se vulnera el principio de legalidad como elemento del debido proceso en materia penal, cuando el legislador establece que los jueces de ejecución de penas deben valorar la conducta punible para decidir sobre la libertad condicional sin darles los parámetros para ello. Por lo tanto, una norma que exige que los jueces de ejecución de penas

³ Sentencia del 27 de julio de 2022. Rad. 61616 (AP3348-2022) MP Fabio Ospitia Garzón.

valoren la conducta punible de las personas condenadas a penas privativas de su libertad para decidir acerca de su libertad condicional es exequible, siempre y cuando la valoración tenga en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional...51. Finalmente, la Corte concluye que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad deben aplicar la constitucionalidad condicionada de la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en todos aquellos casos en que tal condicionamiento les sea más favorable a los condenados...”

4.7.- Mucho menos puede obviarse la finalidad de la gracia en comento, atinente a la posibilidad de resocialización o reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva, acorde a máximas de rehabilitación en virtud del principio de progresividad en el tratamiento punitivo, desde esa óptica la valoración de la conducta no ha de ser entendida como la reedición de esta, pues ello supondría juzgar de nuevo lo que en su momento definió el funcionario judicial de conocimiento en la fase de imposición de la sanción, tampoco implica la consideración de la gravedad en abstracto del ilícito, pues todo ello trasegaría contra el principio de la dignidad humana, lo que se pretende con la consagración del beneficio no es nada distinto a acentuar en fin resocializador de la pena, que tiene como norte la posibilidad cierta del sentenciado de recuperar su libertad y reintegrarse al tejido social antes del cumplimiento total de la pena.

4.8.- Siguiendo la línea jurisprudencial trazada, con respecto a la gravedad de la conducta en el caso concreto, tenemos que el sentenciado aceptó su responsabilidad por el delito atribuido vía preacuerdo, reconoció sus faltas y se sometió al poder punitivo del Estado, adicionalmente, debe resaltarse la calificación que ha obtenido en su instancia en el penal que ha sido calificada en el grado de BUENA Y EJEMPLAR. Lo anterior, con miras a retornar a la sociedad y serle útil, circunstancias éstas que llevaron a que el penal conceptuará favorablemente la concesión del subrogado, con lo que en esta ocasión coincide el Despacho judicial, así que se entiende superado este requisito.

4.9.- En cuanto a la demostración de la existencia de arraigo familiar y social se allegaron los siguientes documentos: (i) declaración juramentada de Nataly Peñuela, (ii) cédula de ciudadanía del sentenciado; (iii) Servicio de recibo público emitido por la Electrificadora de Santander a nombre de Marcos Peñuela Mantilla como propietario del bien inmueble ubicado en la Carrera 20A B – 30 Barrio Colina CAE del municipio del Piedecuesta(S), (iv) referencia familiar firmada por José Luis Tapias – hermano del ajusticiado-; (v) certificación signada por el párroco de Nuestra Señora de la Esperanza – parroquia de Piedecuesta-; (vi) certificación de residencia de la Secretaria de Gobierno y Participación ciudadana del Municipio de Piedecuesta, por lo que se declara cumplido este requisito.

4.10.- Por último, en lo concerniente a la reparación de la víctima o la garantía del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo se demuestre insolvencia económica, se declara como cumplido este requisito pues el delito enrostrado no cuenta con víctima reconocida.

4.11 En consecuencia, se otorgará la libertad condicional por un periodo de prueba igual al tiempo que le falta para cumplir la pena, esto es **18 meses 7.75 días**, previa caución prendaria por valor de un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) que deberá ser consignada en la cuenta judicial del Banco Agrario de este Despacho No. 680012037007 y/o susceptible de póliza Judicial y suscripción de diligencia de compromiso con las obligaciones del artículo 65 del C.P.; advirtiéndosele que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevará a la revocatoria del mecanismo sustitutivo, entrando a purgar en prisión la pena insoluta.

4.12 Una vez el penado cumpla con las obligaciones a su cargo, líbrese ante el CPMS BUCARAMANGA la respectiva boleta de libertad, en la que se indicará que, si el sentenciado es requerido por alguna otra autoridad judicial, deberá dejarse a disposición de quien así lo solicite.

4.13.- Finalmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30A de la ley 1908 de 2018, debe imponerse al sentenciado CORREDOR CASTILLO, la restricción de realizar operaciones mensuales en efectivo en montos superiores a diez (10) SMLMV y el deber de manejar sus recursos en una cuenta bancaria única. Así mismo la prohibición de manejar recursos de liquidez a través de otros productos financieros distintos a la cuenta bancaria única por un término de 10 años que se cuenta desde el momento que acceda efectivamente a la libertad condicional. En consecuencia, deberá informar inmediatamente y antes de acceder a la libertad condicional – SI LA TIENE – la cuenta y la entidad bancaria en la cual manejará sus recursos, así como el monto de sus bienes patrimonio, y deberá actualizarla anualmente a través de medios electrónicos, en una base de datos que será administrada por la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, la cual deberá informar a las autoridades investigativas y judiciales competentes sobre el incumplimiento de las disposiciones aquí previstas, lo cual constará en la diligencia de compromiso.

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA;

RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER al interno a **GERARDO ALONSO CORREDOR CASTILLO** identificado con C.C. 1.097.609.998, como redención de pena 26.75 días, por las actividades realizadas durante la privación de su libertad.

SEGUNDO: CONCEDER la libertad condicional a **GERARDO ALONSO CORREDOR CASTILLO** por un periodo de prueba de VEINTINUEVE MESES VEINTIDOS PUNTO VEINTICINCO DÍAS (29 meses 22.25 días), previa caución de un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV), que deberá ser consignada en la cuenta judicial del Banco Agrario de este

Despacho No. 680012037007 y/o mediante póliza judicial y suscripción de diligencia de compromiso.

TERCERO: IMPONER a **GERARDO ALONSO CORREDOR CASTILLO** la restricción de realizar operaciones mensuales en efectivo en montos superiores a diez (10) SMLMV y el deber de manejar sus recursos en una cuenta bancaria única. Así mismo la prohibición de manejar recursos de liquidez a través de otros productos financieros distintos a la cuenta bancaria única por un término de 10 años que se cuenta desde el momento que acceda efectivamente a la libertad condicional, lo cual constará en la diligencia de compromiso.

CUARTO: SOLICITAR a **GERARDO ALONSO CORREDOR CASTILLO** que informe inmediatamente y antes de acceder a la libertad condicional la cuenta y la entidad bancaria en la cual manejará sus recursos – SI LA TIENE –, así como el monto de sus bienes patrimonio, y deberá actualizarla anualmente a través de medios electrónicos, en una base de datos que será administrada por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, la cual deberá informar a las autoridades investigativas y judiciales competentes sobre el incumplimiento de las disposiciones aquí previstas, lo cual constará en la diligencia de compromiso..

QUINTO: LÍBRESE la respectiva boleta de libertad para ante el CPMS DE BUCARAMANGA, una vez el sentenciado cumpla con las obligaciones a su cargo, en la que se indicará que, si se encuentra requerido por alguna otra autoridad judicial, deberá dejarse a disposición de quien así lo solicite.

SEXTO: ENTERAR a las partes que contra esta decisión proceden los recursos ordinarios de Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



GABRIEL ANDRÉS MORENO CASTAÑEDA
Juez



JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

ASUNTO	ESTUDIO EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN							
RADICADO	CUI 68276600015920160209800 NI. 37784			EXPEDIENTE	FÍSICO		X	
					ELECTRÓNICO			
SENTENCIADO (A)	ENMANUEL RESTREPO NIEBLES			CÉDULA	1.095.817.872			
CENTRO DE RECLUSIÓN	N/A							
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CALLE 1 B #4 A-13 CAMPO VERDE (PIEDRECUESTA)							
BIEN JURÍDICO	VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL	LEY 906/2004	X	LEY 600/2000		LEY 1826/2017		

ASUNTO A TRATAR

Resolver acerca de la **EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN** respecto del sentenciado **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES** identificado con cedula de ciudadanía número 1.095.817.872.

ANTECEDENTES

1. Este juzgado vigila la pena de **DIECISÉIS (16) MESES DE PRISIÓN** impuesta al señor **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES** el 30 de agosto de 2022¹ por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE FLORIDABLANCA**, al haber sido hallado responsable del delito de **LESIONES PERSONALES DOLOSAS** por hechos ocurridos el 22 de octubre de 2016, concediéndosele en sentencia la suspensión condicional de la ejecución de la pena con un periodo de prueba de **2 años**, previa cancelación de caución prendaria y suscripción de la diligencia de compromiso.
2. Con auto del 3 de febrero de 2023² este despacho avocó el conocimiento de las presentes diligencias, ordenando requerir al sentenciado para que diera cumplimiento a la requisitoria para la materialización de la gracia concedida so pena de dar aplicación a las previsiones contenidas en el art. 66 del C.P.
3. Ingresa el expediente al despacho con solicitud de extinción de la sanción elevada por el condenado³.

CONSIDERACIONES

Entra al Juzgado a establecer la viabilidad de decretar la extinción de la condena impuesta al sentenciado **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES**, previa observancia del cumplimiento de los requisitos de orden legal.

¹ BestDoc - CuadernoJ05EpmsBga - archivo 002 fl. 2-12.

² BestDoc - CuadernoJ05EpmsBga - archivo 003.

³ BestDoc - CuadernoJ05EpmsBga - archivo 006.



En la presente encuadernación se tiene que el **JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE FLORIDABLANCA** mediante fallo calendarado 30 de agosto de 2022, declaró penalmente responsable al señor **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES** del punible de **LESIONES PERSONALES DOLOSAS** fijando una pena de **DIECISÉIS (16) MESES DE PRISIÓN**, concediéndose en sentencia la suspensión condicional de la ejecución de la pena, fijándose un periodo de prueba de 2 años, decisión que adquirió ejecutoria formal y material el 7 de septiembre de 2022, según constancia secretarial de la misma fecha⁴.

Debe indicarse que, pese a los requerimientos efectuados por este veedor, el sentenciado **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES** no cumplió con los requisitos exigidos para la materialización del sustituto de la pena privativa de la libertad, esto es, el pago de la caución por valor de 1 SMLMV y suscribir la diligencia de compromiso en los términos del Art. 65 del C.P., luego no ha empezado a descontar el periodo de prueba impuesto.

Bajos los parámetros enunciados, no es viable decretar la liberación definitiva de la sanción impuesta al señor **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES**, por cuanto no ha cumplido el periodo de prueba impuesto al momento de conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, destacando que tal situación es un obstáculo legal para expedir un certificado de paz y salvo por estas diligencias, actuación que continúa activa bajo la vigilancia del periodo de prueba que aún se encuentra vigente.

OTRAS DETERMINACIONES

En virtud del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el sentenciado **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES** al otorgársele la suspensión condicional de la ejecución de la pena, esto es, no cancelar la caución prendaria ni suscribir la diligencia de compromiso como da cuenta el numeral cuarto de la sentencia condenatoria, se hace necesario dar aplicación al artículo 477 del C.P.P., en aras de estudiar la eventual revocatoria del mentado sustituto de la pena privativa de la libertad. En consecuencia, **se dispone:**

1. **CÓRRASE EL TRASLADO DE LEY** al condenado **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES** a la dirección CALLE 198 NO. 33-49 DE FLORIDABLANCA y al correo electrónico nenamary170@hotmail.com, a fin de que dé explicaciones sobre su incumplimiento y aporte las pruebas que pretenda hacer valer a su favor.
2. En aras de garantizar el derecho de defensa del condenado **OFÍCIESE** a la **DEFENSORÍA DEL PUEBLO** para que designe un apoderado de oficio que represente los intereses del aquí sentenciado dentro de las presentes diligencias.
3. Una vez se obtenga el nombre del defensor asignado, **CÓRRASELE TRASLADO** de este proveído para que se pronuncie frente a la apertura trámite de revocatoria de la suspensión condicional de la ejecución de la pena del aquí sentenciado, atendiendo que no ha suscrito diligencia de compromiso ni cancelado la caución prendaria.

⁴ BestDoc - CuadernoJ05EpmsBga - archivo 002 fl. 13.



En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO QUINTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA;**

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR la solicitud de extinción de la pena incoada en favor del sentenciado **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES** identificado con cedula de ciudadanía número 1.095.817.872, conforme a las consideraciones consignadas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. - DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 477 DEL C.P.P., en aras de estudiar la eventual revocatoria de la **SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA** concedida al señor **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES**, al no cancelar la caución prendaria ni suscribir la diligencia de compromiso como da cuenta el numeral cuarto de la sentencia condenatoria.

TERCERO.- NOTIFÍQUESE y CÓRRASE TRASLADO al condenado **ENMANUEL RESTREPO NIEBLES** a la dirección **CALLE 198 NO. 33-49 DE FLORIDABLANCA** y al correo electrónico nenamary170@hotmail.com, a fin de que dé explicaciones sobre su incumplimiento y aporte las pruebas que pretenda hacer valer a su favor.

CUARTO. - OFÍCIESE a la **DEFENSORÍA DEL PUEBLO** para que designe un apoderado de oficio que represente los intereses del aquí sentenciado dentro de las presentes diligencias.

QUINTO. - Una vez se obtenga el nombre del defensor asignado, **CÓRRASELE TRASLADO** de este proveído para que se pronuncie frente a la apertura trámite de revocatoria de la suspensión condicional de la ejecución de la pena del aquí sentenciado, atendiendo que no ha suscrito diligencia de compromiso ni cancelado la caución prendaria.

SEXTO. - Contra la decisión en la que se niega la extinción de la pena proceden los recursos de reposición y apelación, entre tanto, la apertura del trámite previsto en el artículo 477 del C.P.P. no cuenta con recursos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUGO ELEAZAR MARTÍNEZ MARÍN
Juez



JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

ASUNTO	REDENCIÓN DE PENA						
RADICADO	CUI 47001 6000 000 2019 00147 00 NI. 39081			EXPEDIENTE	FÍSICO		
					ELECTRÓNICO		X
SENTENCIADO (A)	LUCIA KARINE URREA USMA			CÉDULA	24.335.838		
CENTRO DE RECLUSIÓN	RM BUCARAMANGA						
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	N/A						
BIEN JURÍDICO	SEGURIDAD PÚBLICA	LEY 906/2004	X	LEY 600/2000		LEY 1826/2017	

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve la petición de **REDENCIÓN DE PENA** en favor de la sentenciada **LUCIA KARINE URREA USMA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.335.838.

ANTECEDENTES

1. El **JUZGADO ÚNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN DESCONGESTIÓN DE SANTA MARTA** el día 28 de septiembre de 2020¹ condenó a la señora **LUCIA KARINE URREA USMA** a la pena de **CUARENTA (40) MESES QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN**, al haberla hallado responsable del delito de **EXTORSIÓN AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO**, negándole los subrogados penales.
2. Se logra evidenciar, que la condenada por cuenta de estas diligencias ha estado privada de la libertad desde el **9 de marzo de 2021**², actualmente reclusa al interior de la **RM BUCARAMANGA**.
3. Durante la vigilancia de este diligenciamiento se ha reconocido a la sentenciada un monto total de 76 días de redención³, atendiendo a que en auto del 01 de febrero de 2024 se dio aplicación a la Resolución No. 427 del 10 de agosto de 2022, confirmada por la Resolución No. 450 del 30 de agosto de la misma anualidad, que sancionó a la ciudadana **LUCIA KARINE URREA USMA** con una pérdida de 90 días de redención por haber incurrido en una falta disciplinaria.
4. Ingresa el expediente al despacho con solicitud de estudio de redención y traslado a otro establecimiento penitenciario en favor de la aquí sentenciada.

¹ Expediente digital BestDoc - J1EPMSManizalez fl. 13-27.
² Expediente digital BestDoc - J5EPMSBga – archivo 004 fl. 2.
³ Expediente digital BestDoc - J5EPMSBga – archivo 022.



CONSIDERACIONES

Atendiendo que en el presente asunto se deprecia el estudio de redención jurídica de pena y el traslado a otro establecimiento penitenciario en favor de **LUCIA KARINE URREA USMA**, se abordaran estos temas por separado, por ser figuras jurídicas completamente distintas con exigencias diferentes.

I. REDENCIÓN DE PENA.

Ahora bien, respecto del certificado de estudio, trabajo y enseñanza que acompaña la petición de redención que aquí se estudia, debe el despacho manifestar que durante los periodos allí enunciados, si bien es cierto, la penada desarrolló actividades tendientes a redimir pena por TRABAJO, no puede dejarse a un lado que la calificación de su conducta durante el periodo del 10-08-2023 al 09-11-2023 fue “MALA”, situación que imposibilita la redención de ese interregno porque no fue coherente su proceso de resocialización con el comportamiento que debe tener al interior del penal, por lo que no se tendrá en cuenta la siguiente certificación en consideración a lo previsto en el artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario:

CERTIFICADO	FECHA	TRABAJO	ESTUDIO	CONDUCTA	FOLIO
19095405	01-10-2023 al 09-11-2023	134.8	---	Sobresaliente	10 ⁴

Atendiendo a que con la última certificación del 14 de febrero de 2024⁵ sólo se observa la evaluación del comportamiento de la sentenciada hasta el 09-11-2023, desconociéndose la calificación otorgada hasta la fecha, se hace necesario oficiar a la **RM BUCARAMANGA** para que allegue certificado que dé cuenta de la calificación de conducta para el periodo del 10-11-2023 al 31-12-2023, a efectos de poder estudiar la redención de ese intervalo según el Certificado TEE No. 19095405 que fue allegada a éste despacho.

Ahora bien, pese a la negativa de estudio de redención señalada en líneas anteriores, se hace necesario determinar el tiempo físico que lleva privado de la libertad la condenada y las redenciones concedidas, para que tenga claridad sobre su situación jurídica al interior de este diligenciamiento.

❖ **Detención Física**

9 de marzo de 2021 a la fecha —————→ 35 meses y 28 días

❖ **Redenciones reconocidas en autos anteriores**

—————→ 02 meses y 16 días

Total Privación de la Libertad	38 meses y 14 días
---------------------------------------	---------------------------

En virtud de lo anterior, se tiene que a la fecha la sentenciada **LUCIA KARINE URREA USMA** ha cumplido una pena de **TREINTA Y OCHO (38) MESES Y CATORCE (14) DÍAS DE PRISIÓN**, teniendo en cuenta la detención física y las redenciones de pena reconocidas.

⁴ Expediente digital BestDoc - JSEPMSBga – archivo 025.

⁵ Expediente digital BestDoc - JSEPMSBga – archivo 025 fl. 09.



II. SOLICITUD DE TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO.

Entra el Juzgado a estudiar la solicitud de traslado elevada por el defensor de la señora **LUCIA KARINE URREA USMA⁶**, refiriendo que la sentenciada es madre de la menor K. L. Sabogal Urrea de 12 años de edad, quien reside en la municipalidad de Manizales (Caldas), por lo que pretende se traslade a su representada a la Reclusión de Mujeres de Manizales para estar cerca de su menor hija, haciéndose necesario el análisis y valoración de los elementos fácticos, así como de los presupuestos normativos establecidos por el Legislador para tal precepto.

La Ley 65 de 1993, modificada por ley 1709 de 2014, mediante la cual se expidió el "Código Penitenciario y Carcelario", en su artículo 73 y siguientes ha regulado el traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, estableciendo unas causales taxativas por las cuales se invoca dicho trámite:

"ARTÍCULO 73. TRASLADO DE INTERNOS. *Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella.*

ARTÍCULO 74. SOLICITUD DE TRASLADO. *<Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> El traslado de los internos puede ser solicitado a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por:*

- 1. El Director del respectivo establecimiento.*
- 2. El funcionario de conocimiento.*
- 3. El interno o su defensor.*
- 4. La Defensoría del Pueblo a través de sus delegados.*
- 5. La Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados.*
- 6. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Los familiares de los internos dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.*

ARTÍCULO 75. CAUSALES DE TRASLADO. *<Artículo modificado por el artículo 53 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Son causales del traslado, además de las consagradas en el Código de Procedimiento Penal, las siguientes:*

- 1. Cuando así lo requiera el estado de salud del interno, debidamente comprobado por el médico legista.*
- 2. Cuando sea necesario por razones de orden interno del establecimiento.*
- 3. Cuando el Consejo de Disciplina lo apruebe, como estímulo a la buena conducta del interno.*
- 4. Cuando sea necesario para descongestionar el establecimiento.*
- 5. Cuando sea necesario por razones de seguridad del interno o de los otros internos.*

PARÁGRAFO 1o. *Si el traslado es solicitado por el funcionario de conocimiento indicará el motivo de este y el lugar a donde debe ser remitido el interno.*

⁶ Expediente digital BestDoc - J5EPMSBg - archivo 029.



PARÁGRAFO 2o. *Hecha la solicitud de traslado, el Director del Inpec resolverá teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y las condiciones de seguridad del establecimiento; y procurará que sea cercano al entorno familiar del condenado.*

PARÁGRAFO 3o. *La Dirección del Establecimiento Penitenciario informará de manera inmediata sobre la solicitud del traslado al familiar más cercano que el recluso hubiere designado o del que se tenga noticia.*

(...) ARTÍCULO 77. TRASLADO POR CAUSAS EXCEPCIONALES. *Cuando un detenido o condenado constituya un peligro evidente para la vida e integridad personal de algunos de sus compañeros o de algún empleado del establecimiento, por virtud de enemistad grave o amenazas manifiestas, se tomarán respecto de él medidas rigurosas de seguridad, que pueden ser en los casos más graves y por excepción, hasta el traslado a otro establecimiento.*

Sólo en estos casos excepcionales y con suficiente justificación, podrá el Director de un centro de reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso inmediato a la autoridad correspondiente."

Como puede apreciarse, existen parámetros reglados que no sólo facultan al INPEC para resolver solicitudes de traslado, sino que las mismas deben invocar las causales taxativas y excepcionales legalmente dispuestas para su trámite, toda vez que están contenidas en un código que por su naturaleza es de orden público, instituyéndose incluso una dependencia específica al interior del INPEC encargada de su estudio:

"ARTÍCULO 78. JUNTA ASESORA DE TRASLADOS. *Para efectos de los traslados de internos en el país, se integrará una junta asesora que será reglamentada por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Esta Junta formulará sus recomendaciones al Director del Instituto, teniendo en cuenta todos los aspectos sociojurídicos y de seguridad."*

De las anteriores citas normativas, se evidencia que a la **Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario**, por intermedio de la **Junta Asesora de Traslados**, le asiste la facultad discrecional de valorar las características particulares de cada interno y adoptar una postura teniendo en cuenta los factores objetivos y subjetivos que se adviertan, y que la misma norma contempla, debiendo estudiarse minuciosamente las causales de traslado que expresamente contempla la anterior disposición legal.

Así las cosas, tras advertirse que este Despacho no es competente para resolver la solicitud de traslado en favor de la sentenciada, se correrá traslado de su solicitud a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que se pronuncie al respecto, así como se oficiará a la Dirección y área Jurídica de la **RM BUCARAMANGA**, para que informen a este despacho las gestiones adelantadas por el establecimiento penitenciario frente a la solicitud de traslado elevada por la sentenciada **LUCIA KARINE URREA USMA**.

En razón y mérito de lo expuesto, el **JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA**,



RESUELVE

PRIMERO. - **DECLARAR** que a la fecha la sentenciada **LUCIA KARINE URREA USMA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.335.838, ha cumplido una pena de **TREINTA Y OCHO (38) MESES Y CATORCE (14) DÍAS DE PRISIÓN**, teniendo en cuenta la detención física y las redenciones de pena reconocidas.

SEGUNDO. - **DENEGAR** a **LUCIA KARINE URREA USMA** la redención de pena por las horas de trabajo que se relacionan en el siguiente cuadro, en razón a que, si bien en los periodos estudiados la calificación de la actividad fue sobresaliente, en algunos periodos su conducta al interior del penal fue calificada como MALA.

CERTIFICADO	FECHA	TRABAJO	ESTUDIO	CONDUCTA	FOLIO
19095405	01-10-2023 al 09-11-2023	134.8	---	Sobresaliente	10 ⁷

TERCERO. - **OFICIAR** a la **RM BUCARAMANGA** para que allegue certificado que dé cuenta de la calificación de conducta para el periodo del 10-11-2023 al 31-12-2023, a efectos de poder estudiar la redención de ese intervalo según el Certificado TEE No. 19095405 que obra en el expediente.

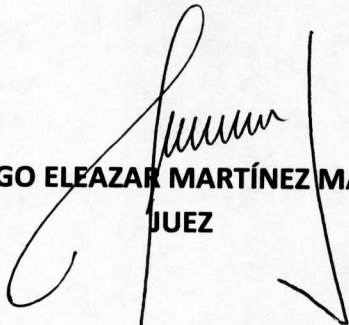
CUARTO. - **INFORMAR** a la ciudadana **LUCIA KARINE URREA USMA** que este Despacho no es competente para resolver la solicitud de traslado a la Reclusión de Mujeres de Manizales elevada por su defensor, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

QUINTO. - **CORRER TRASLADO** a la **DIRECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO** de la solicitud de traslado a la Reclusión de Mujeres de Manizales elevada por el defensor de la sentenciada **LUCIA KARINE URREA USMA**⁸, para que se pronuncie al respecto.

SEXTO. - **OFICIAR** a la Dirección y área Jurídica de la **RM BUCARAMANGA**, para que informen a este despacho las gestiones adelantadas por el establecimiento penitenciario frente a la solicitud de traslado elevada en favor de la penada **LUCIA KARINE URREA USMA**.

SÉPTIMO. - **CONTRA** la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


HUGO ELEAZAR MARTÍNEZ MARÍN
JUEZ

⁷ Expediente digital BestDoc - JSEPMSBga – archivo 025.

⁸ Expediente digital BestDoc - JSEPMSBga – archivo 029.



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	REDENCIÓN DE PENA						
RADICADO	68.001.60.00.159.2023.03774 NI 39473	EXPEDIENTE	FISICO			-	
			ELECTRONICO			X	
SENTENCIADO	OSCAR MAURICIO CÁCERES SORACA	CEDULA	1.102.348.699				
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPMS BUCARAMANGA						
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	NO APLICA PORQUE SE ENCUENTRA INTRAMURAL						
BIEN JURIDICO	PATRIMONIO ECONOMICO	LEY 906/2004	-	LEY 600/2000	-	LEY 1826/2017	X

ASUNTO

Se ocupa el despacho de resolver solicitud de **REDENCIÓN DE PENA** solicitada por el condenado **OSCAR MAURICIO CÁCERES SORACA**.

ANTECEDENTES

1. Este juzgado vigila la pena de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN** impuesta el 4 de julio de 2023 por el **JUZGADO 19 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA** por haberlo hallado responsable del delito de **HURTO CALIFICADO**, por hechos acaecidos el 18 de abril de 2023, negándole los subrogados penales.
2. Se logra evidenciar que el condenado se encuentra privado de la libertad por cuenta de estas diligencias desde el **18 DE ABRIL DE 2023**, actualmente recluido en la **CPMS BUCARAMANGA**.
3. El 6 de marzo de 2024 ingresa el expediente al despacho para estudio de redención de pena (Pdf.008)

CONSIDERACIONES

Con el fin de resolver la solicitud de redención de pena impetrada por el condenado, se observa dentro del expediente la siguiente información.

CERTIFICADO	FECHA	TRABAJO	ESTUDIO	CONDUCTA	PDF
19090578	14-07-2023 a 31-12-2023	---	828	Sobresaliente	008
TOTAL			828		

En consecuencia, procede la redención de la pena por **ESTUDIO** así:

ESTUDIO	828 / 12
TOTAL	69 días



Luego acreditado el lleno de las exigencias atrás expuestas por concepto de **ESTUDIO** se abonará a **OSCAR MAURICIO CACERES SORACA** un quantum de **SESENTA Y NUEVE (69) DÍAS**.

Se hace necesario determinar el tiempo físico que lleva privado de la libertad el condenado y las redenciones concedidas, para que tenga claridad sobre su situación jurídica al interior de este diligenciamiento.

❖ **Días Físicos de Privación de la Libertad**

18 de abril de 2023 a la fecha —————> 10 meses 23 días

❖ **Redención de Pena**

Concedida presente Auto —————> 2 meses 9 días

Total Privación de la Libertad	13 meses 2 días
---------------------------------------	------------------------

En virtud de lo anterior, se tiene que a la fecha el señor **OSCAR MAURICIO CACERES SORACA** ha cumplido una pena de **TRECE (13) MESES DOS (2) DÍAS DE PRISIÓN**, teniendo en cuenta la detención física y las redenciones de pena hasta ahora reconocidas.

Por lo anteriormente expuesto, **JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA**.

RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER a **OSCAR MAURICIO CÁCERES SORACA** identificado con la cédula de extranjería número 1.102.348.699, una redención de pena por **ESTUDIO** de **SESENTA Y NUEVE (69) DÍAS**, que se abonara al tiempo que lleva en prisión.

SEGUNDO: DECLARAR que a la fecha el condenado **OSCAR MAURICIO CÁCERES SORACA** ha cumplido una pena **TRECE (13) MESES DOS (2) DÍAS DE PRISIÓN**, teniendo en cuenta la detención física y la redención de pena reconocida.

TERCERO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUGO ELEAZAR MARTÍNEZ MARÍN
Juez

JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bucaramanga, ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO	REDENCION DE PENA						
RADICADO	NI 39706 (CUI 68001600015920210410700)			EXPEDIENTE	FISICO	X	
					ELECTRONICO		
SENTENCIADO (A)	LISARDO GARCIA ROBAYO			CEDULA	1.095.940.774		
CENTRO DE RECLUSIÓN	CPMS BUCARAMANGA						
DIRECCIÓN DOMICILIARIA	NO APLICA SE ENCUENTRA DETENIDO INTRAMURAL						
BIEN JURIDICO	CONTRA LA VIDA	LEY906/2004	X	LEY 600/2000	LEY 1826/2017		

ASUNTO

Se ocupa el despacho de resolver solicitud de **REDENCIÓN DE PENA** deprecada por el condenado **LISARDO GARCÍA ROBAYO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.095.940.774.

ANTECEDENTES

1. El **JUZGADO DECIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA** el 6 de julio de 2023 condenó al señor **LISARDO GARCÍA ROBAYO** como responsable de los delitos de **HOMICIDIO AGRAVADO** a la pena de **DOSCIENTOS OCHO (208) MESES DE PRISIÓN**, negando la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
2. Se logra evidenciar, que el condenado se encuentra privado de la libertad por cuenta de estas diligencias desde el **20 DE JUNIO DE 2021**, actualmente recluido en el **CPMS BUCARAMANGA**.
3. El condenado solicita reconocimiento de redención de pena.

PETICIÓN

Con el fin de resolver la solicitud de redención de pena impetrada por el condenado, se observa dentro del expediente la siguiente información.

CERTIFICADO	FECHA	TRABAJO	ESTUDIO	CONDUCTA	FOLIO
19094820	18-07-2023 a 30-11-2023	---	384	Sobresaliente	---
TOTAL		---	384		

En consecuencia, procede la redención de la pena por **ESTUDIO** así:

ESTUDIO	384/ 12
TOTAL	32 días

Luego acreditado el lleno de las exigencias atrás expuestas por concepto de **ENSEÑANZA** abonará a **LISARDO GARCÍA ROBAYO, TREINTA Y DOS (32) DÍAS DE PRISIÓN.**

Ahora bien, debe resaltar el despacho que durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, si bien es cierto, el condenado desarrollo actividades tendiente a redimir pena por **ESTUDIO**, NO puede dejarse a un lado que la calificación para ese periodo fue **"DEFICIENTE"**, situación que imposibilita pueda redimir tiempo en que estudio porque no fue coherente su proceso de resocialización con la manera en que desarrollo la actividad, por lo que no se tendrá en cuenta la siguiente certificación en consideración a lo previsto en el artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

CERTIFICADO	FECHA	TRABAJO	ESTUDIO	CONDUCTA	FOLIO
19094820	01-12-2023 a 31-12-2023	---	24	Deficiente	---
TOTAL		---	24		

Se hace necesario determinar el tiempo físico que lleva privada de la libertad la condenada y las redenciones concedidas, para que tenga claridad sobre su situación jurídica al interior de este diligenciamiento.

❖ Días Físicos de Privación de la Libertad			
20 de junio de 2021 a la fecha	—————>	32 meses	18 días
❖ Redención de Pena			
Concedida presente Auto	—————>	1 mês	2 días

Total Privación de la Libertad	33 meses	20 días
---------------------------------------	-----------------	----------------

En virtud de lo anterior, se tiene que a la fecha el señor **LISARDO GARCÍA ROBAYO** ha cumplido una pena de **TREINTA Y TRES (33) MESES VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN**, teniendo en cuenta la detención física y la redención de pena reconocida.

OTRAS DETERMINACIONES

INSÉRTESE en el expediente el acta de audiencia de fecha 21 de septiembre de 2023 allegada por el Juzgado Décimo Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga en la cual resuelven aprobar el acuerdo conciliatorio y ordena archivar el trámite de **INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL** en la causa penal seguida en contra de **LISARDO GARCÍA ROBAYO.**

Por lo anteriormente expuesto, **JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA.**

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER a **LISARDO GARCÍA ROBAYO** Identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.095.940.774 una redención de pena por **ESTUDIO** de **32 DÍAS**, que se abonara al tiempo que lleva en prisión.

SEGUNDO. - DECLARAR que a la fecha el condenado **LISARDO GARCÍA ROBAYO** ha cumplido una pena **TREINTA Y TRES (33) MESES VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN**, teniendo en cuenta la detención física y las redenciones de pena reconocidas.

TERCERO. - DENEGAR a **DENEGAR** a **MIGUEL ANGEL NIÑO HERRERA** los certificados:

CERTIFICADO	FECHA	TRABAJO	ESTUDIO	CONDUCTA	FOLIO
19094820	01-12-2023 a 31-12-2023	---	24	Deficiente	---
TOTAL		---	24		

CUARTO. - INSÉRTESE en el expediente el acta de audiencia de fecha 21 de septiembre de 2023 allegada por el Juzgado Décimo Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga en la cual resuelven aprobar el acuerdo conciliatorio y ordena archivar el trámite de **INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL** en la causa penal seguida en contra de **LISARDO GARCÍA ROBAYO**.

QUINTO. - Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUGO ELEAZAR MARTÍNEZ MARÍN
Juez